



Temas claves para el Plan de Nación

Síntesis de la Consulta Especializada

***SÍNTESIS DE LA
CONSULTA ESPECIALIZADA***

***BASES PARA EL
PLAN DE NACIÓN***

Mayo / Diciembre 1998

Temas Claves Para el Plan de Nación

Síntesis de las propuestas de las mesas especializadas

***Abril de 1999
San Salvador, El Salvador***

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	<i>i</i>
 Mesa 1	
<i>Sociedad sin fronteras</i>	
A. Propuestas estratégicas	1
B. Compromisos necesarios	2
C. Actores	2
D. Acciones y plazos	3
 Mesa 2	
<i>Descentralización y reorganización territorial</i>	
A. El problema	5
B. Parte de la solución: El proceso de descentralización	6
C. Propuestas para impulsar el proceso	8
 Mesa 3	
<i>Exclusión social y pobreza. El Salvador:</i>	
<i>Una propuesta para la superación de la pobreza</i>	
A. Marco general de la estrategia	11
A.1. Objetivo general	11
A.2. Principios generales	12
A.3. Lineamientos generales	12
B. Programas estratégicos	13
 Mesa 4	
<i>Ciencia y tecnología</i>	
A. Presentación	15
B. Principios de la propuesta	16
C. Fases y etapas de la estrategia	17

Mesa 5

Modernización del Estado

- | | |
|---|----|
| A. Propuestas estratégicas | 19 |
| B. Compromisos necesarios, actores principales y plazos | 21 |

Mesa 6

Áreas estratégicas para el desarrollo de El Salvador

- | | |
|---------------------------------|----|
| A. Propuestas estratégicas | 23 |
| B. Compromisos | 25 |
| B.1. Políticos | 25 |
| B.2. Educativos | 25 |
| B.3. Socioeconómicos | 26 |
| B.4. De participación ciudadana | 26 |
| B.5. Institucionales | 27 |
| C. Actores principales | 27 |
| D. Acciones y plazos | 28 |

Mesa 7

Desarrollo agropecuario y rural

- | | |
|----------------------------|----|
| A. Propuestas estratégicas | 29 |
| B. Compromisos necesarios | 30 |
| C. Actores | 32 |
| D. Acciones | 32 |

Mesa 8

La nueva cultura empresarial y laboral

- | | |
|-------------------------|----|
| Propuestas estratégicas | 35 |
|-------------------------|----|

Mesa 9

La profundización de la reforma del Sistema Judicial

- | | |
|--|----|
| A. Diagnóstico sobre la administración de justicia | 41 |
| B. Importancia en la administración de justicia | 42 |
| C. Objetivo general de la reforma judicial | 42 |
-

D. Los cambios propuestos	43
D.1. Cambios normativos	43
D.2. Cambios institucionales	43
D.3. Cambios culturales	43
E. La estrategia	44

Mesa 10

Ética en El salvador

A. Objetivos estratégicos	45
B. Propuestas estratégicas	45
C. Compromisos necesarios	46
D. Actores principales	48
E. Acciones y plazos	48

Mesa 11

Reforma fiscal y priorización de la inversión pública

A. Propuestas estratégicas	51
B. Compromisos necesarios	52
C. Actores principales	53
D. Acciones y plazos	53

Mesa 12

Medio ambiente y desarrollo

Propuesta de compromisos	55
A. Reordenamiento territorial-ambiental	56
B. Reforma institucional y gestión participativa	57

Mesa 13

Reforma del sistema de salud

A. Propuestas estratégicas	59
B. Compromisos necesarios	62
C. Actores principales	62
D. Acciones y plazos	62

Mesa 14

Estrategia nacional de vivienda

A. Objetivos generales de la estrategia	63
B. Factores que inciden en el problema de la vivienda	63
B.1. Factores económicos	63
B.2. Factores técnicos	64
B.3. Factores territoriales	65
B.4. Factores ambientales	65
C. Aspecto legal normativo	65
D. Aspecto institucional	66
E. Compromisos y actores principales	66
F. Acciones y plazos	67

Mesa 15

Educación, cultura y deporte

Propuestas estratégicas	69
A. Educación	70
B. Cultura y desarrollo	71
C. Deportes	73

Mesa 16

Salvadoreños y salvadoreñas en el exterior

A. Propuestas estratégicas	75
A.1. Culturales	76
A.2. Económicas	76
A.3. Transferencia de conocimiento y tecnología	76
A.4. Desarrollo práctico de la educación tecnológica y científica	76
A.5. Políticas	76
B. Compromisos necesarios	77
C. Acciones y plazos	77

Mesa 17

Mesa multidisciplinaria de Washington

Propuestas estratégicas	79
A. El Plan de Nación y el fortalecimiento de la democracia	79

B. Reforma electoral	80
C. El papel del Estado	80
D. Política fiscal	80
E. Relaciones exteriores y la nueva diplomacia	81
F. Infraestructura	81
G. Una estrategia salvadoreña de ciencia y tecnología	82
H. Política de tratamiento de las remesas	83
I. Salud	83
J. Educación	84
K. Financiamiento externo	85
L. Gestión macroeconómica	86

Mesa 18

Integración centroamericana, San José

Propuestas estratégicas	87
A. Derechos políticos y participación en el desarrollo nacional	88
B. Mecanismos efectivos de participación	88
C. Integración centroamericana	89

Mesa 19

Información y comunicaciones para la democracia y el desarrollo

A. Propuestas estratégicas	91
B. Compromisos necesarios	92
C. Actores principales	94
D. Acciones y plazos	95

<i>Instituciones de apoyo y soporte a las mesas especializadas</i>	97
---	-----------

PRESENTACIÓN

Cuando en enero de 1998 la Comisión Nacional de Desarrollo invitó a toda la población a... *“pensar en grande (...) por encima de todas las pequeñeces habituales- para poder también hacer grande a nuestro país: El Salvador ”*, generó un proceso de consulta sobre las Bases para el Plan de Nación con el fin de impulsar un dinamismo social que diera soporte a la toma de acuerdos nacionales que nos permitan lograr el desarrollo integral del país.

La consulta a la ciudadanía tuvo tres manifestaciones: La consulta territorial, en la cual participaron habitantes de los diferentes municipios del país; la consulta intersectorial, que se desarrolló con representantes de distintos sectores sociales, políticos y económicos; y la consulta especializada, en la cual participaron académicos, profesionales y expertos en diversas ramas del desarrollo y la vida nacional. El trabajo resumen que ahora se presenta corresponde a las propuestas surgidas durante la Consulta Especializada, la cual estuvo organizada en “mesas de trabajo”.

Los temas abordados por las Mesas Especializadas se definieron a partir del análisis de las relaciones y determinaciones entre los 31 compromisos y 7 desafíos u objetivos propuestos en el documento Bases para el Plan de Nación.

Las Mesas Especializadas que se instalaron fueron las siguientes:

Mesa 1: Sociedad sin fronteras

Mesa 2: Descentralización y reorganización territorial

Mesa 3: Exclusión social y pobreza

Mesa 4: Ciencia y tecnología

Mesa 5: La modernización del Estado

Mesa 6: Ramas estratégicas de desarrollo y reformas sectoriales pendientes

Mesa 7: Desarrollo agropecuario y rural

Mesa 8: Nueva cultura laboral y empresarial

Mesa 9: Profundización de la reforma del sistema judicial

Mesa 10: Ética en El Salvador

Mesa 11: Reforma fiscal y priorización de la inversión pública

-
- Mesa 12: Medio ambiente y desarrollo
 - Mesa 13: Reforma del sistema de salud
 - Mesa 14: Estrategia nacional de vivienda
 - Mesa 15: Educación, cultura y deportes
 - Mesa 16: Salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, Los Ángeles
 - Mesa 17: Mesa interdisciplinaria, Washington DC
 - Mesa 18: Integración centroamericana, San José, Costa Rica
 - Mesa 19: Información y comunicaciones para la democracia y el desarrollo

Las propuestas dentro de cada área temática surgieron a través del ejercicio de discusión, análisis y concertación entre personas de diferentes posturas y visión política, con formación académica y experiencias profesionales diversas, residentes en el país, en Costa Rica y en las ciudades de Los Ángeles y Washington, en Estados Unidos. Pero todas con un objetivo común: proponer estrategias viables de solución a temas claves para el desarrollo nacional.

El proceso de instalación de las mesas inició el 28 de mayo de 1998 y, durante seis meses, sus integrantes brindaron su tiempo, recursos, conocimientos y experiencias, sin retribución monetaria alguna. Esto constituye un ejemplo de cultura cívica y demuestra que la construcción de un nuevo El Salvador es posible si se asumen compromisos y concertan soluciones aprovechando la rica y abundante experiencia de los ciudadanos.

El producto de esos seis meses de trabajo fue recopilado en el texto titulado “Temas Claves para el Plan de Nación. Consulta Especializada”, el cual fue entregado por los Especialistas a la Comisión Nacional de Desarrollo el 18 de enero de 1999.

Ahora, se presenta una síntesis de dicho texto, en la cual se recogen las propuestas estratégicas y prioritarias, a partir de su viabilidad y de los procesos que su ejecución podría desencadenar.

Con este documento síntesis se pretende ampliar la difusión de las propuestas de las Mesas Especializadas a todos los sectores de la vida nacional; no obstante, el texto completo también está disponible para aquellas personas que quieran profundizar en los temas.

En este esfuerzo de consulta especializada destaca el respaldo de 34 instituciones que brindaron sus aportes técnicos, documentación, infraestructura y el apoyo moral que fueron claves para fortalecer la confianza y el involucramiento de la intelectualidad salvadoreña.

Particularmente se reconoce el aporte valioso que voluntariamente ha hecho este grupo de 211 especialistas para la elaboración del contenido del Plan de Nación. El Plan de Nación es un proceso que demanda compromisos de todos los sectores para construir, con nuestro trabajo creativo, audaz y propositivo, El Salvador como todos lo queremos.

San Salvador, abril de 1999.

Comisión Nacional de Desarrollo

“Sociedad sin fronteras”

Autores

Napoleón Campos, Roberto Meza (Coordinador),
William Pleitez, Sigfrido Reyes, David Rivas,
Cecilia Rodas, Carlos Mauricio Rosales, Roberto Turcios.

A. Propuestas estratégicas

1. Una reforma constitucional, a fin de consagrar la defensa de los salvadoreños en el exterior como obligación estatal.
2. La creación de la estructura institucional idónea para fomentar la organización de los nacionales en el exterior y para brindarles protección legal: un Viceministerio en el ramo de Relaciones Exteriores.
3. La creación del Consejo de Política Exterior que sea el rector de la estrategia en el ámbito internacional. A fin de garantizar su carácter de rector estratégico debe contemplarse la reforma constitucional correspondiente.

El Consejo debe integrarse con representantes de la Presidencia de la República, de los diplomáticos de carrera, de los sectores académicos y productivos y de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.

4. Una reforma administrativa que genere el marco institucional y brinde atención adecuada a cinco áreas:
 - (a) Monitoreo de asuntos migratorios.
 - (b) Atracción de inversiones.
 - (c) Promoción de exportaciones.
 - (d) Cooperación técnica.
 - (e) Intercambios científicos y culturales.
5. El Salvador debe contar con un consejo rector de las negociaciones comerciales internacionales, que le imprima sentido nacional y que esté integrado por representantes del gobierno, la empresa privada y de los sectores laboral, académico y político. Un organismo de esta naturaleza debe definir la agenda de negociaciones comerciales internacionales y establecer las orientaciones fundamentales a seguir en cada una de ellas. La creación de este consejo unida a la constitución de un equipo negociador altamente calificado, responsable a su vez de la definición y manejo de la política comercial, es indispensable para superar la endémica falta de preparación que muestra el país en esta materia.

B. Compromisos necesarios

Para que las propuestas estratégicas puedan ser realizables es necesario que exista un compromiso político nacional que involucre al Órgano Ejecutivo; a la Asamblea Legislativa; al Ministerio de Relaciones Exteriores (que debe asumir un papel protagónico en estas reformas), al Ministerio de Economía (que tiene un papel importantísimo que cumplir en cuanto a la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones), al Ministerio de Educación (que tiene el imperativo de promover la elevación de capital humano y la inserción de este capital en el proceso de globalización, así como el intercambio científico y cultural), a la sociedad civil en general y los sectores productivos en particular.

C. Actores

- Presidencia de la República.
- Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Viceministerio de Comercio Exterior.
- Ministerio de Educación.
- Organizaciones de salvadoreños en el exterior.
- Sector académico y universitario.
- Partidos políticos.
- Sector empresarial.
- Sector laboral.

D. Acciones y plazos

Es importante aprovechar el cambio de gobierno, a fin de impulsar consultas y reuniones de carácter oficial que den lugar a la consolidación de compromisos políticos que faciliten la creación de los futuros organismos e instituciones objeto de estas propuestas estratégicas. Debido a que algunas de estas figuras necesitan de reformas constitucionales, es importante iniciar la labor de organización de los Consejos, analizando las personas que formarán parte de los mismos, así como los lineamientos jurídicos que los regirán mientras las reformas se hagan realidad.

“Descentralización y reorganización territorial”

Autores

Alberto Enríquez (Coordinador), José Guillermo Galván,
Ulrich Künzel, Aldo Miranda, Maura de Montalvo,
Víctor Antonio Orellana, Roberto Paredes Martell (Coordinador),
Wilson Dagoberto Salmerón.

Resumen del planteamiento y propuestas

A. El problema

En nuestro país existen profundos desequilibrios socio-territoriales (regionales, urbanos y rurales), cuyo impacto más significativo es la creciente desigualdad en la calidad de vida de las personas. Un Estado centralizado impide enfrentar esta situación en forma adecuada y con eficiencia, dando espacio al incremento de la iniquidad y limitando las posibilidades de combatir eficazmente el avance de la pobreza.

El planteamiento descentralizador del Gobierno se ha diluido en esfuerzos dispersos y tímidos, más orientados a la desconcentración, y no se ha traducido en un proceso con una estrategia de descentralización.

Existe además un desequilibrio entre Administración y territorio. Los siguientes aspectos tienen incidencia y/o explican este desequilibrio:

- (a) Falta de un nivel intermedio en la organización político administrativa territorial del país, entre Gobierno Central y municipios.
- (b) Inexistencia de una política para el uso y ordenamiento del suelo.
- (c) Disminución del uso de suelo para fines agropecuarios.
- (d) Fuerte migración de la población rural e incremento de la población urbana.
- (e) Alta concentración de personas en las principales ciudades, complicando la administración de estas.
- (f) Concentración de recursos y funciones en la gran urbe, en detrimento de municipios rurales.
- (g) Regulación de competencias municipales en normativas que se coordinan en instancias centrales.
- (h) Poca uniformidad en la organización administrativa territorial impulsada por instituciones públicas.
- (i) Diferencias entre municipios para brindar servicios de acuerdo a competencias asignadas.

B. Parte de la solución: El proceso de descentralización

Para impulsar el proceso de descentralización y reorganización territorial en el país se requiere una estrategia integral y concertada.

Entendemos la descentralización como un proceso ordenado y progresivo de transferencia de poder, competencias, responsabilidades y recursos desde el Gobierno Central hacia unidades político administrativas territorialmente desagregadas, parte del orden jurídico nacional, que representan los intereses de la población local comprendida en las nuevas unidades territoriales.

La descentralización, que es un medio y no un fin en sí misma, debe tener -como proceso- un carácter:

1. Nacional, con respaldo político gubernamental.

2. Político, dándole sentido político a la elaboración con calidad técnica.
3. Participativo, que genera responsabilidad democrática y condiciones para que la fuerza social propia de cada territorio sea un factor clave de su propio desarrollo.
4. Transformador del Estado, pero que lo fortalezca en su rol regulador y coordinador; que permita cambios en el Gobierno Central sin debilitarlo.
5. Integrador y articulador de lo local con lo regional y lo nacional, aunque el factor determinante del desarrollo en los municipios o en las nuevas unidades territoriales sean sus fuerzas internas.

Los objetivos del proceso de descentralización son:

1. Fortalecer la democracia participativa.
2. Apoyar y hacer eficiente la lucha contra la pobreza.
3. Generar capacidad de crecimiento económico y un proceso de desarrollo equitativo y sustentable en cada unidad territorial, haciendo eficiente y racional el uso de los espacios nacionales.
4. Promover y preservar los recursos naturales.
5. Ampliar y profundizar la modernización del Estado.

De este proceso de descentralización se beneficiarán: la sociedad civil, los Gobiernos Locales (de los municipios o de entidades más amplias que fueran creadas), el Gobierno Central y el Estado Nacional.

Descentralizar el poder y la administración pública exige una nueva manera de organizar las unidades político administrativas territoriales, ya que la descentralización adquirirá sentido si la transferencia es bien aprovechada por las unidades territoriales que la recibirán.

En este sentido, la descentralización del Estado y la reorganización política administrativa de nuestro territorio son dos procesos que se deben impulsar en forma gradual, paralela y articulada, teniendo como punto de partida los actuales municipios, como el mejor espacio para promover la participación de la población y socializar valores cívicos de pertenencia a una comunidad política mayor.

Es con, y desde los municipios que se deben construir las nuevas unidades político administrativas territoriales, estas contarán con una base más sólida si consideran los procesos que se están desarrollando en los municipios. Es un proceso que debe partir desde abajo, pero orquestado y en correspondencia con una política y estrategia nacional.

Otro criterio es que se tenga en cuenta la diversidad de enfoques para la creación de nuevas unidades territoriales. Pero algo fundamental es que estas contribuyan a desarrollar y/o fortalecer la democracia participativa, ya que no se pretende reproducir esquemas centralizadores que depositen las ventajas y beneficios de la descentralización únicamente en las autoridades de las unidades territoriales nuevas o, existentes.

Consideramos la coordinación y asociación de municipios circunvecinos como un procedimiento viable para construir las nuevas entidades estatales, intermedias entre Gobierno Central y el municipio. Este conjunto de municipios constituiría una nueva unidad político administrativa territorial que va más allá de la entidad primaria que constituye un solo municipio.

Se trata de un esquema dinámico que parte del municipio como unidad primaria actual, que permite la estructuración de asociaciones de municipios o microregiones y que, posteriormente, posibilita también la construcción de nuevas unidades político administrativas más amplias, con un carácter más regional o departamental (conjunto de microregiones), aunque no necesariamente tienen que ser los actuales departamentos.

En función del compromiso con este proceso, debe quedar claro que los sujetos de la descentralización son los órganos del Estado, los gobiernos municipales y la sociedad civil, quienes deberán construir espacios, mecanismos y metodología para impulsar estos procesos.

C. Propuestas para impulsar el proceso

1. Crear una Comisión Nacional de Descentralización y Reorganización Territorial para organizar, orientar y coordinar ambos procesos. Debe ser plural, integrada por representantes o personas representativas de los diferentes actores y sectores nacionales. Presidida por persona honorable y capaz, nombrada por el Presidente de la República de acuerdo a criterios que no sean político-partidistas.

Para pasar a la acción, esta comisión deberá elaborar y desarrollar una agenda estratégica, que al menos contenga:

- (a) Elaboración de programa de trabajo que refleje etapas del proceso y resultados a lograr.
 - (b) Organización de equipos técnicos para desarrollar trabajos.
 - (c) Diagnóstico de situación actual.
 - (d) Aspectos institucionales y transferencia de poder, competencias y recursos: delimitación de competencias, definición de unidades territoriales receptores, clasificación de municipios según capacidades y consideración de impulsar experiencias piloto, etc. Esto implica analizar áreas de transferencia: infraestructura y servicios básicos, atención primaria en salud, educación básica, revisar aplicación de Ley de Medio Ambiente.
 - (e) Aspectos fiscales y financieros: transferencias, ageneración de recursos propios, sistema de créditos, contrapartidas locales, etc.
 - (f) Revisión, actualización y armonización del marco legal: promover creación de Ley de descentralización y reordenamiento territorial.
 - (g) Programa de capacitación.
 - (h) Campaña nacional de información, educación y motivación para promover la conciencia y asumir compromisos.
 - (i) Elaboración y presentación de presupuesto y propuesta de fuentes de financiamiento del proceso.
2. Crear un Foro Nacional para la Descentralización y la Reorganización Territorial, como instancia ampliamente representativa que genere insumos y propuestas sustantivas para el avance de los procesos.
 3. Establecer otros mecanismos y espacios que contribuyan a generar conciencia sobre el proceso, facilitar la formulación de los aportes de la población y establecer comunicación con esta, en los diferentes municipios y regiones del país.
 4. Además, se propone que la Asamblea Legislativa constituya en su seno una comisión de descentralización y reorganización territorial.
-

El impulso de este proceso implica conformar las instancias propuestas durante los primeros 100 días del próximo gobierno, lo cual exige trabajar durante el período de transición con el gobierno electo y con las fuerzas políticas de oposición.

“Exclusión social y pobreza

El Salvador: Una propuesta para la superación de la pobreza”

Autores

Carlos Roberto Briones, Luis Castillo Rivas, Ricardo Max Freund,
Guillermo García, Anabella Lardé de Palomo,
Óscar Antonio Pérez, Rafael Antonio Pleitez,
Aída Verónica Simán de Betancourt (Coordinadora),
José Jorge Simán Jacir, Ildiko Tesak.

La pobreza es un fenómeno con causas múltiples y no es homogénea. Asimismo, es una forma de exclusión social que tiende a autoreproducirse en el tiempo, al generar una dinámica que limita la integración económica y social de la gran mayoría de los individuos que son afectados por dicha condición. En tal sentido, y luego de identificar los factores de entorno y aquellos directos de mayor incidencia en la pobreza, se sugiere la siguiente estrategia para su superación.

A. Marco general de la estrategia

A.1. Objetivo general: Que la mayoría de los salvadoreños tengan acceso a una educación de calidad, a oportunidades de generación de ingreso y de integrarse competitivamente a los mercados, para que sean capaces de

cubrir sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades físicas, intelectuales y espirituales de forma sostenida.

A.2. Principios generales para la estrategia: Focalización, integralidad, participación, sostenibilidad, solidaridad, territorialidad y concertación.

A.3. Lineamientos generales para la estrategia:

- (a) Formulación diferenciada de políticas. En el corto plazo, la política se orientaría a la asistencia (compensación) de familias en condiciones de extrema pobreza y grupos más vulnerables, mediante la implementación de programas focalizados, de carácter territorial y poblacional; mientras que en el mediano y largo plazo se haría énfasis a la creación de las condiciones competitivas y transformaciones necesarias para direccionar la inversión pública y privada.
- (b) Prioridad por los más pobres. Territorialmente y en el corto plazo, la política deberá priorizar la asistencia e inversión en las zonas rurales y grupos más vulnerables urbanos que se encuentran en condiciones de marginalidad.
- (c) Integralidad en la promoción de las capacidades de los pobres. Será necesario desarrollar programas que combinen componentes educativos con alimenticios o educación con capacitación laboral, por ejemplo.
- (d) Solidaridad fiscal. En el sentido de comprometer a toda la ciudadanía en el objetivo de superación de la pobreza. Por lo que se buscará la remoción de las restricciones legales e institucionales que actualmente impiden a los ciudadanos decidir sobre el esfuerzo fiscal y los mecanismos de asignación de los recursos hacia iniciativas de superación de la pobreza.
- (e) Reconversión productiva y mejora de los activos de los pobres. En el mediano y largo plazo, la política buscará la generación gradual de condiciones que permitan la reconversión productiva y la inserción al mercado de los sectores con menor acceso a los beneficios del desarrollo.
- (f) Acumulación sostenida de capital humano. Un acceso más equitativo a las oportunidades de la educación es indispensable para mejorar la

distribución del ingreso en el país y para poder sostener, en el largo plazo, el crecimiento económico.

- (g) Reducción de las desigualdades territoriales. Con la política se apoyará la descentralización y la modernización del Estado, para que el aparato estatal pueda orientar recursos hacia iniciativas de competitividad y de inversión que surjan de las oportunidades y ventajas comparativas de las diferentes regiones.
- (h) Institucionalidad sustentada en la participación. La política debe recoger el apoyo de las comunidades, con el objeto de potenciar al máximo los elementos que permitan pasar de la superación de la pobreza a la promoción del desarrollo, mediante la participación y corresponsabilidad ciudadana, a través de la creación de sistemas promotores del desarrollo, de carácter local, regional y nacional.

B. Programas estratégicos

Entre los programas más relevantes propuestos se encuentran los siguientes:

1. *Programa de integración de familias y comunidades en estado de vulnerabilidad y marginalidad*. La ruptura del “círculo vicioso de la pobreza” requiere de una ambiciosa asignación de recursos para la inversión pública destinada a dotar de seguridad jurídica a las familias que viven en zonas públicas, reubicar a los que viven en lugares vulnerables, proveerles los servicios básicos; así como mejorar la seguridad ambiental, la seguridad sanitaria y las oportunidades de recreación en los asentamientos que presenten una alta densidad de hogares pobres.
2. *Programa de apoyo a la incorporación productiva de las mujeres de los hogares pobres*. Por medio de la continuación del apoyo a la formación de hogares comunitarios de bienestar (Centros de Bienestar Infantil), los cuales ofrecen alimentación suplementaria y cuidados infantiles básicos a niños menores de siete años.
3. *Programa de caminos de acceso*. Mediante la focalización de las inversiones públicas hacia la ampliación y mantenimiento de la red de caminos rurales y puentes, que permitan la integración territorial y económica de las zonas más pobres y deprimidas.

4. *Fortalecimiento y rehabilitación de programas de bolsas de trabajo.* Mediante el desarrollo de instancias departamentales, regionales y nacionales que posibiliten la integración de la oferta y demanda laboral, sobre la base de una estrecha coordinación entre los gobiernos municipales, Ministerio de Trabajo y el sector privado.
5. *Programa de infraestructura vial y de apoyo a la producción y generación de ingreso.* Mediante la focalización de las inversiones públicas y la estimulación de las privadas en las zonas más pobres, hacia la ampliación y mantenimiento de la infraestructura vial y de apoyo directo a la producción y comercialización.
6. *Desarrollo de una política de transformación productiva de la micro y pequeña empresa.* La política para promover la competitividad en este sector debe ser diferenciada y específica, de acuerdo al desigual grado de desarrollo de los dos grandes subconjuntos del universo empresarial y también debe ser participativa y no estatal.
7. *Descentralización y/o desconcentración regional y/o departamental de la oferta de bienes y servicios públicos.* Para propiciar un uso más eficiente de los recursos públicos es necesario acercar la provisión de los servicios a los beneficiarios, a través de la transferencia de recursos a las oficinas departamentales, a los gobiernos municipales, a las ONG's o a las mismas comunidades. Es necesario que esta descentralización esté acompañada de un sistema de contraloría social que garantice el buen uso de los recursos.
8. *Reforma institucional para la promoción del desarrollo de la competitividad empresarial en el sector rural.* Por medio de la configuración de un Consejo Nacional para el Desarrollo Rural que definiría las políticas para el sector, y que tendría como misión fundamental reconfigurar la oferta de servicios financieros y técnicos para elevar la competitividad de las empresas/actividades en el área rural.
9. *Aumentar significativamente el presupuesto dirigido a las áreas sociales.* Los recursos adicionales podrían provenir de una mayor captación mediante la reducción de la evasión fiscal y la eliminación de las exenciones.
10. *Programas de educación en población.* Impulsar programas que contribuyan a una mejor calidad de vida de la población, e incluyan componentes de educación sexual, salud reproductiva y autoestima de la mujer.

“Ciencia y tecnología”

Autores

Manuel Arrieta, Claudia de Anaya, Francisco Chávez,
Federico Miguel Huguet Rivera (Coordinador), Rolando Marín,
Carlos Alfredo Palacios, Carlos Federico Paredes Castillo,
Jorge Rovira, Juan Ricardo Salinas, Edgardo Suárez,
Jorge Tobar, Carlos Villeda.

A. Presentación

La propuesta de la Mesa 4 pretende dar un aporte sustantivo para potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación como mecanismos que permitan el desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida de los salvadoreños, a través del incremento de la productividad y la competitividad nacionales.

Ciencia y tecnología representan en nuestro país invariables residuales o secundarias en el desarrollo social y económico, lo cual ha condicionado a El Salvador a ser un importador neto de estas, mero adaptador de procesos, usuario neutral, y virtual espectador de la revolución científico-tecnológica en marcha a nivel planetario.

Los sectores más directamente involucrados con la ciencia y tecnología (Estado, universidades, institutos tecnológicos, empresa privada y gremios profesionales) no muestran una interrelación relativamente dinámica, ni vasos comunicantes con convergencia de esfuerzos, lo cual refuerza la tendencia hacia una débil

institucionalidad y a una limitada identificación con la cultura de la ciencia y la tecnología.

Se presenta una breve caracterización de El Salvador en la situación actual, para continuar con la visión de El Salvador al año 2021 desde la perspectiva científica y tecnológica, delineando aspectos cualitativos de la misma, la cual es base para establecer los principios básicos de la propuesta.

B. Principios de la propuesta

Los principios básicos que guían la propuesta son los siguientes:

1. El mejoramiento progresivo de la calidad del ser humano salvadoreño como el centro primordial de atención.
2. Un país orientado hacia la calidad total que integra competitividad y productividad.
3. Un enfoque hacia la sostenibilidad y respeto por el medio ambiente y recursos naturales.
4. La amplia consulta como eje articulador de la viabilidad de la Nación.
5. La búsqueda de la mejora constante del nivel de vida de la población.
6. La popularización y difusión de la ciencia y tecnología como guía operativo.
7. La valorización del conocimiento y su pronta aplicación.
8. La atención especial hacia la incorporación de la micro y pequeña empresa en el esfuerzo nacional de calidad.
9. Horizonte nacional de trascendencia basado en la libertad racionalmente vivida.

La propuesta está organizada en siete componentes que se abordan a partir de la problemática, los objetivos que se plantean para resolverla y las estrategias que deben permitir operativizarla.

Las temáticas que se desarrollan en ese contexto son:

- a) Ciencia y tecnología y su relación con el desarrollo.
- b) Institucionalidad de la ciencia y la tecnología.
- c) Financiamiento al desarrollo científico-tecnológico.
- d) Formación y capacitación de recursos humanos.
- e) Transferencia, innovación y desarrollo tecnológico.
- f) Infraestructura, fomento y gestión de la calidad y la productividad.
- g) Información como factor clave de desarrollo.

El alcance de la propuesta presenta fases o etapas de desarrollo para el corto plazo (2000-2005), mediano plazo (2006-2010) y largo plazo (2011-2021), considerando que en su mayoría, las acciones sistemáticas a seguir para el cumplimiento de esos plazos tienen su inicio en el año 2000. No obstante, el grupo de trabajo considera de sustancial importancia hacer los esfuerzos necesarios a fin de que las iniciativas deben continuar o iniciar en el presente año de forma sistemática y bajo una agenda de trascendencia nacional.

C. Fases y etapas de la estrategia

El alcance de la Propuesta de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Plan de Nación tiene un horizonte general al año 2021. Los plazos son definidos de la siguiente manera: Corto plazo: 2000-2005; mediano plazo 2006-2010; largo plazo 2011-2021. Se observa que las acciones sistemáticas a seguir comienzan en el año 2000.

A corto plazo (2000-2005): Se fortalecerán los servicios científicos tecnológicos y todo lo que ayude a las empresas a ser más productivas y competitivas; se desarrollarán al menos los siguientes fondos: (i) De desarrollo tecnológico orientado a empresas e innovación, ajustado al cliente y a las necesidades de los proyectos de las empresas, (ii) de capacitación de recursos humanos, para formar recursos, vinculando planes institucionales de universidades y otras entidades que necesiten recursos competentes, para obtener mínimo de competencia generalizada (centros especializados); (iii) de formación de masas críticas en el

país, en base a sectores prioritarios en que se quiera tener más capacidad tecnológica o una concentración masiva y especializada de científicos; y (iv) para servicios científicos tecnológicos.

Adicionalmente se desarrollarán servicios de normalización, metrología, control de calidad, de capacitación, esquemas para introducir profesionales, extensionismo tecnológico, pruebas y ensayos, laboratorios de todo tipo, información tecnológica, mejora de estadísticas, etc. Todo ello incidirá, en un plazo brevísimo, en el incremento de la productividad y de la competitividad del país.

A mediano plazo (2006-2010): La política se orientará a la investigación aplicada y desarrollo experimental de las empresas. Se procurará que haya una especialización competente en áreas prioritarias, es decir, tener verdaderas concentraciones de capacidad en áreas determinantes para el desarrollo del país, que podrían ser: las materiales y otras, en las cuales se debería tener verdaderos expertos que solucionen los posibles problemas.

Es necesario tener competencia concentrada en determinadas áreas, lo que se podría hacer creando centros específicos de investigación, donde se concentra capacidad para generar tecnología.

“Modernización del Estado”

Autores

Luis Felipe Alam y Alam, Efrén Arnoldo Bernal,
Óscar Rodolfo Campos Anaya, Fidel Chávez Mena,
Francisco Antonio Cornejo, Ricardo Alfonso Córdova (Coordinador)
Arnoldo Jiménez, Patricia Lazo de Parras,
Antonio Martínez Uribe, Manuel Robles, Marco Rodríguez,
Roberto Vidales, Juan Héctor Vidal y Jorge Alberto Villacorta.

A. Propuestas estratégicas

En las sesiones de trabajo de nuestra Mesa, se elaboró un Plan de Acción para la Modernización del Estado (PAME), estructurado en torno a dos grandes ejes de carácter estratégico: consolidar el Estado Democrático de Derecho y promover una Economía de Mercado con Equidad. Este Plan de Acción sirvió de base para la elaboración del informe que fue publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo en el libro “Temas Claves para el Plan de Nación”, que contiene las propuestas de las 19 mesas especializadas.

Teniendo como marco de referencia el PAME, hemos identificado cinco propuestas claves, consideradas estratégicas para dinamizar el proceso de modernización del Estado en nuestro país. Por cada una de las propuestas se desarrollan las acciones principales que deben impulsarse.

1. Se requiere de un debate nacional que permita arribar a un consenso básico sobre lo que deberían ser los roles del Estado Moderno en El Salvador. Esta definición clara de los roles es básica para poder enfrentar posteriormente el tema de la descentralización, pues supone que se debe tener claridad en las competencias o atribuciones y recursos que permanecen en la esfera del gobierno central, así como de las funciones o atribuciones y sus recursos, que son transferidas a otras instancias del Estado (por ejemplo al Municipio); y de aquellas que salen de la esfera de lo público para ser transferidas a particulares, es decir, a la esfera de lo privado.
2. *Una reforma del régimen político electoral*, para lo cual se propone: (i) Una Reforma Constitucional del artículo 85, para eliminar el monopolio que tienen los partidos en la representación política de la ciudadanía, a efectos de permitir que grupos ciudadanos o comités cívicos puedan participar en los comicios, por lo menos a nivel local; (ii) promulgar una Ley de Partidos Políticos que regule ciertos aspectos básicos del funcionamiento de estos, como el régimen de financiamiento tanto público como privado y la fiscalización del mismo; (iii) reformar el Tribunal Supremo Electoral, separando la función administrativa de la función jurisdiccional; (iv) una reforma concertada del sistema electoral, que considere: avanzar en el Registro Nacional de Personas Naturales, introducir la representación proporcional en los Consejos Municipales, revisar el período de duración de los Consejos Municipales (recomendando su ampliación a cinco años); introducir el voto domiciliario y revisar el tema de las circunscripciones electorales; (v) una Reforma Constitucional para modificar la composición del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de “ciudadanizar” y “despartidizar” su composición y la de los organismo electorales (JED, JEM y JRV).
3. *La reforma y modernización del Órgano Legislativo*, para lo cual se plantea: (i) Modificar el sistema de elección de las circunscripciones electorales, pasando de un esquema departamental al distrital o a uno mixto, como una medida para enfrentar el problema principal de la inexistencia de una relación entre representante y representado, entre elector y elegido; (ii) reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa; (iii) crear un sistema de información y formular una política de comunicación para que las actividades de la Asamblea Legislativa sean transparentes.

4. *Reformar y fortalecer el régimen municipal e impulsar una política de descentralización*, para lo cual se recomienda: (i) Armonizar y modernizar el marco legal que regula la relación entre el Gobierno Central y los Municipios; (ii) fortalecer el régimen municipal, en lo administrativo, legal y financiero; (iii) impulsar el reordenamiento territorial; (iv) redefinir el rol de las Gobernaciones Departamentales; (v) formular una Estrategia Nacional para la Descentralización, que sea el resultado del mayor consenso posible entre los distintos actores sociales y políticos, para lo cual se considera necesario la creación de una Comisión para la descentralización y el reordenamiento territorial, la promulgación de una Ley Marco de descentralización y el establecimiento de un organismo rector del proceso de descentralización y, finalmente (vi) implementar la Estrategia Nacional para la Descentralización Administrativa y Territorial.
5. *Fortalecer el papel regulador del Estado*, para lo cual se recomienda: asegurar la independencia y fortalecer a las instituciones reguladoras (Superintendencias del Sistema Financiero, de Valores y de Pensiones) y limitar su actuación discrecional.

B. Compromisos necesarios, actores principales y plazos

1. Para el debate nacional que permita arribar a un consenso básico sobre lo que deberían ser los roles del Estado Moderno en El Salvador se requiere de un *compromiso político-institucional* en torno a la redefinición de los fines del Estado. Para alcanzar este compromiso deben participar los siguientes actores: dirigentes de los partidos políticos, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y dirigentes de la sociedad civil. Plazo: un año.
2. *La reforma del régimen político electoral* requiere de: (i) compromisos políticos en materia de representatividad política y reforma electoral, (ii) aprobación de una Ley de Partidos Políticos y, (iii) reformas constitucionales del artículo 85 y en la composición del TSE. Para alcanzar estos compromisos deben participar los siguientes actores: dirigentes de los partidos políticos, Asamblea Legislativa y dirigentes de la sociedad civil. Plazo: Un año.
3. *La reforma y modernización del Órgano Legislativo* requiere de: (i) compromisos institucionales para la modernización del marco legal y de reestructuración del marco institucional, (ii) compromisos políticos en torno al reordenamiento político y administrativo y, (iii) formular e implementar una estrategia Nacional para la Descentralización, para lo cual se requiere de compromisos

para incrementar los niveles de participación ciudadana. Para alcanzar esto, deben participar los siguientes actores: dirigentes de los partidos políticos, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FIS-DL) y dirigentes de la sociedad civil. Plazo: Dos años.

4. *Fortalecer el papel regulador del Estado* requiere de: (i) un compromiso político-institucional en torno a la redefinición de los fines del Estado, (ii) modernización del marco legal y (iii) reestructuración del marco institucional. Para alcanzar estos compromisos deben participar los siguientes actores: dirigentes de los partidos políticos, Presidencia de la República y Asamblea Legislativa. Plazo: Un año.

“Áreas estratégicas para el desarrollo de El Salvador”

Autores

Jaime Acosta (Coordinador), Nicola Angelucci,
Emma Arauz, Héctor Bonilla, Rafael Castellanos,
Luis Enrique Córdova, Mauricio González, Ramón Portillo
Roberto Rivera Campos, Santiago Ruiz G.

A. Propuestas estratégicas

El país no puede continuar sin una apuesta estratégica en torno a su base productiva, que le permita orientar esfuerzos y recursos hacia la consecución del desarrollo económico y social. En este sentido, debe partirse de una definición del desarrollo que se quiere alcanzar y que, en este caso, se refiere al triángulo del desarrollo sostenible, cuya visión amplia comprende, con igual importancia, el desarrollo económico, el combate de la pobreza y el equilibrio ecológico.

Detrás de esta visión se encuentra el ser humano como centro de la propuesta. En nuestro caso, todos y cada uno de los salvadoreños, como beneficiarios del desarrollo. Por tanto, la estabilidad macroeconómica y el buen desempeño de los grandes agregados de la economía, aunque son condición esencial para el desarrollo sustentable, no son condición suficiente.

Ante esta concepción del desarrollo se propone una identificación de sectores estratégicos que pueden facilitar el logro del objetivo propuesto. Se han identificado tres grupos:

1. Sectores cuyo buen funcionamiento es esencial para lograr un crecimiento equilibrado de la economía. Aquí se habla del sector agrícola, la pequeña y mediana empresa, y la actividad exportadora, que tienen un impacto importante en la generación de empleo y reducción de la pobreza.
2. En un segundo grupo se encuentran aquellos sectores que por algún motivo no están cumpliendo cabalmente el papel protagónico que les corresponde, y cuyas imperfecciones pueden obstaculizar, en algún momento, el desarrollo de otros sectores. Aquí se menciona el sector financiero y el de transporte.
3. Por último, están aquellos sectores que se visualizan con potencial de crecimiento si se les refuerza adecuadamente, como la maquila, el turismo, la pesca, textiles y los servicios.

El apoyo a estos sectores debe darse dentro de un contexto de apertura de mercado, que genere exportaciones, inversiones y la competencia necesaria para mejorar la eficiencia de las empresas y evitar los monopolios. El Gobierno debe desempeñar un activo papel en aquellas áreas que le competen y que apoyan los esfuerzos de las empresas en mejorar sus niveles de productividad, como son la infraestructura y la modernización del aparato institucional.

Se deben propiciar arreglos sectoriales amplios, menos focalizados y discriminatorios, donde puedan ser acogidas empresas de ramas distintas. Algunas de las medidas sectoriales que pueden anticiparse son: (i) eliminación de barreras legales e institucionales, (ii) apoyo a la investigación e incorporación de nueva tecnología, (iii) creación de canales de información, (iv) promoción de foros internacionales, (v) fomento de asociaciones entre productores y abastecedores, (vi) apoyo a la actividad innovadora con demanda en los mercados internacionales, (vii) simplificación de trámites y mayor coordinación entre el sector público y privado, (viii) establecimiento del Estado de Derecho y, (ix) mayor seguridad ciudadana.

B. Compromisos

B.1. Políticos

1. Debe existir el compromiso político de continuar impulsando las reformas estructurales que todavía se encuentran pendientes. Al mismo tiempo, la política económica debe manejarse en forma responsable, de manera que el país goce de estabilidad macroeconómica y ofrezca un clima atractivo para la inversión.
2. Por otro lado, debe existir la voluntad política de apoyar a sectores claves en la lucha contra la pobreza, como son el sector rural y la pequeña y mediana empresa. Debe existir una política clara para mejorar la infraestructura y los servicios básicos en el área rural, como parte de un programa de generación de polos de desarrollo en diferentes áreas del país.
3. El Estado debe comprometerse a desarrollar obras de infraestructura que sean prioritarias, y que sean licitadas transparentemente.

B.2. Educativos

1. Debe ampliarse la cobertura y calidad de la educación desde los niveles básicos, y ofrecer los programas que exige el rumbo del desarrollo que se ha establecido para el país, facilitando al mismo tiempo la capacitación de mano de obra a nivel técnico, en procesos como operaciones textiles avanzadas, la pesca y otras.
2. Se necesita la capacitación de los operarios de las unidades de transporte público, con lo que se mejoraría la calidad del servicio ofrecido.
3. También requiere especial atención el desarrollo de cursos para mejorar la capacidad gerencial de los pequeños y medianos empresarios y de los agricultores.
4. Debe impulsarse una educación bilingüe y la capacitación de mano de obra orientada a los servicios que se estima tienen mayor potencial en el futuro, especialmente en lo que se refiere a las telecomunicaciones, al desarrollo de software y conocimientos de hardware.

B.3. Socioeconómicos

1. El Gobierno y la empresa privada deben trabajar más cercanamente y aunar esfuerzos por brindar el apoyo que se necesita en sectores específicos. Por un lado, la gran empresa debe facilitar el acceso a servicios a los que muy difícilmente puede acceder la pequeña empresa por sí sola. Por su parte, el Gobierno debe impulsar fuertemente la restauración y ampliación de la infraestructura vial y, la modernización de los puertos y sus servicios.
2. Las empresas deben estar conscientes de los esfuerzos internos que deben realizar para ser competitivas. Se necesita de un personal identificado con los objetivos de la empresa. La capacitación que brinden las empresas a sus trabajadores y la motivación de estos es esencial.
3. Por la importancia que presentan algunos sectores -como el financiero- para el desarrollo armónico de la economía, estos sectores deben actuar solidaria y responsablemente, conscientes del papel que desempeñan en los esfuerzos de desarrollo del país.
4. Se debe buscar formas innovadoras de otorgar créditos, buscando hacer accesible el financiamiento a los pequeños y medianos empresarios; a los pequeños agricultores y a otros sectores frecuentemente excluidos de los canales formales de financiamiento.
5. El Gobierno debe apoyar los centros de información de acceso al público, aquellas actividades que favorezcan la incorporación de nueva tecnología, así como la asociación entre los productores y procesadores agroindustriales.
6. Por último, se requiere de una participación más activa del Gobierno junto con la empresa privada en la promoción del país y su producción en el exterior.

B.4. De participación ciudadana

La posibilidad de que la Sociedad Civil externe lo que considera son sus necesidades más apremiantes es un insumo invaluable para que el Gobierno pueda orientar su inversión.

1. Deben existir espacios que permitan a la ciudadanía controlar el uso de los fondos y el desarrollo de proyectos. Por otro lado, debe prevalecer la cultura del respeto y el compromiso de actuar con honradez y responsabilidad, lo que sólo es posible si existe transparencia en los procesos.
2. Consideramos que para la solución de muchos de los problemas que actualmente presenta el transporte público se necesita de la acción conjunta de las autoridades de transporte, dueños de unidades, motoristas y, de la ciudadanía en general.

B.5. Institucionales

1. Se requiere el compromiso del Gobierno para llevar a cabo la modernización de su aparato institucional, en especial lo que se refiere a los trámites de exportación e importación, inversiones y aduanas y, para realizar una lucha frontal para erradicar la corrupción.
2. Se debe fortalecer el sistema financiero y su supervisión; contar con normas financieras modernas y ágiles, pero al mismo tiempo prudentes, que permitan contar con un sistema eficiente y transparente.
3. Deben existir procedimientos simplificados, especialmente en lo que se refiere al marco regulatorio para la pequeña y mediana empresa.
4. Debe existir una legislación que facilite la subcontratación y la asociación entre empresas.
5. Debe contarse con -y hacerse cumplir- una regulación del transporte que tome en cuenta las necesidades de las distintas partes involucradas y que al mismo tiempo responda a las exigencias del mundo actual. Por otro lado, también es necesario cumplir con un plan de reordenamiento vial a nivel nacional.
6. De gran importancia es contar con una ley laboral moderna y flexible, que se aplique eficazmente y que vele por los derechos de trabajadores y patronos.

C. Actores principales

- Gabinete económico y funcionarios públicos. En particular, de los Ministerios de Economía, Obras Públicas, Hacienda, Educación; Viceministerio de Transporte y Comisión de Modernización del Estado.

- Alcaldías.
- Diputados de la Asamblea Legislativa.
- Partidos políticos.
- Empresa privada (grande, mediana y pequeña).
- Instituciones del Sistema Financiero.
- Universidades y centros de investigación.
- La ciudadanía en general.

D. Acciones y plazos

Consideramos que el apoyo sectorial es un proceso continuo y dinámico. Algunos beneficios empezarán a observarse a muy corto plazo. Sin embargo, los frutos de este esfuerzo podrán experimentarse a plenitud en un período de mediano plazo, sobre todo en algunos sectores como el agropecuario, donde el ciclo de los cultivos puede demorar el rendimiento de la inversión, o en aquellos sectores donde la capacitación de mano de obra no es inmediata.

“Desarrollo agropecuario y rural”

Autores

Edwin Aragón, Rebeca Arias, Antonio Cabrales,
Edgar Cruz Palencia, Ligia de Luna, Mercedes Llort (Coordinadora),
Mariano Olazábal, Tom Oomen, Hugo Ramos,
René Rivera Magaña, Clemente San Sebastián, Francisco Zaldaña.

A. Propuestas estratégicas

1. Invertir en capital humano ampliando la cobertura y mejorando la calidad de los servicios de educación básica, técnica vocacional y de atención primaria en salud en las zonas rurales.
2. Aumentar la inversión en infraestructura productiva y social en zonas rurales y mejorar la eficiencia en el diseño, administración y supervisión de la inversión pública, estimulando la participación de la sociedad civil y del sector privado en todas las etapas.
3. Propiciar la generación de actividades productivas agrícolas y no agrícolas que utilicen intensivamente mano de obra y mejoren los ingresos de las familias rurales.
4. Establecer un marco de políticas macroeconómicas consistentes con el desarrollo agropecuario y rural.

5. Adecuar las políticas sectoriales y modernizar los servicios productivos para promover la eficiencia de las actividades agropecuarias, el desarrollo de microempresas y agroindustrias rurales.
6. Modernizar el marco regulatorio y fortalecer la capacidad normativa e institucional del Estado, especialmente en el área de recursos naturales y de ordenamiento de los mercados agropecuarios.

B. Compromisos necesarios

1. Para *ampliar la cobertura y mejorar los servicios sociales en zonas rurales* es necesario que el Estado y la sociedad en general se comprometan a reducir rápidamente el analfabetismo y a lograr la cobertura universal de la educación básica. Las instituciones deben aceptar la participación de la sociedad civil en la definición de las reformas educativas y de salud, así como la descentralización en la prestación de dichos servicios. Por su parte, los ciudadanos deben involucrarse organizadamente en el proceso de reformas y co-responsabilizarse en la administración y prestación de los servicios.
2. Para *aumentar la inversión en infraestructura productiva y social en zonas rurales y mejorar su eficiencia* es necesario que el Estado se comprometa con un desarrollo urbano y rural armonioso y, a mejorar la priorización y focalización de la inversión pública, utilizando criterios estrictamente técnicos. El compromiso político y socioeconómico debe ser asignar mayores recursos a la inversión en infraestructura rural a través de la reorientación presupuestaria. A su vez, el Gobierno y las municipalidades deben comprometerse a aumentar su eficiencia y su capacidad de diseñar, administrar y supervisar los proyectos de inversión, promoviendo la participación de la sociedad civil en la priorización de los mismos. Los ciudadanos deben comprometerse a participar activamente definiendo las necesidades de sus comunidades.
3. Para *propiciar la generación de actividades productivas agrícolas y no agrícolas en áreas rurales* es indispensable que el Gobierno y la Asamblea Legislativa se comprometan a crear un entorno de políticas económicas e institucionales, que incentiven la inversión privada y la selección de tecnologías intensivas en mano de obra. Estas políticas deben incluir: (i) reglas transparentes y estables, (ii) respeto a los derechos de propiedad, (iii) seguridad ciudadana, (iv) cumplimiento de contratos y, (v) incentivos económicos (uniformización

de salarios urbanos y rurales y, distribución equitativa de beneficios y costos de los servicios públicos).

4. Para *contar con un marco de políticas macroeconómicas consistentes con el desarrollo agropecuario y rural* es necesario que los políticos, el Gobierno y las diferentes instancias de decisión reconozcan al sector agropecuario ampliado como el motor del crecimiento económico y base para el desarrollo sostenible del país. Ese reconocimiento debe traducirse en el compromiso de eliminar todo sesgo antiagrícola y antirural de las políticas macroeconómicas, para lograr un tratamiento equitativo entre productos y sectores de la economía. Compromisos específicos deben ser: (i) Reducir significativamente los impactos de la apreciación cambiaria; (ii) ejecutar una política comercial que sea transparente y establecer en sus objetivos que asegure la operación de los mercados en condiciones de amplia competitividad, la integración regional y el comercio externo bajo reglas de equidad y reciprocidad y, (iii) ejecutar una política fiscal no discriminatoria. El compromiso institucional debe ser eliminar en todo lo posible la discrecionalidad que tienen los funcionarios en la aplicación de las políticas.
5. Para *adecuar las políticas sectoriales y modernizar los servicios agropecuarios* el Gobierno Central debe comprometerse a: (i) Desarrollar los mercados financieros agropecuarios con novedosos mecanismos y tecnologías; (ii) eliminar la intervención estatal en los mercados agropecuarios y las reservas estratégicas estatales; (iii) ejecutar un Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología que integre a todos los actores con un enfoque sistémico y mucho más participativo; (iv) fortalecer los programas de Sanidad Agropecuaria y la normalización; (v) incrementar el área bajo riego con responsabilidad compartida, pública y privada; (vi) establecer un mecanismo de estabilización de precios agrícolas y, (vii) fortalecer los sistemas de información que apoyen la toma de decisiones en las unidades productivas. El compromiso de la sociedad civil y del sector privado debe ser el de compartir la responsabilidad en el diseño, ejecución y financiamiento solidario de programas y proyectos.
6. La *modernización del marco regulatorio y el fortalecimiento de la capacidad normativa e institucional del Estado* debe apuntar prioritariamente al uso eficiente de los recursos naturales dentro de un concepto de conservación y desarrollo; el compromiso del Estado debe empezar por un ordenamiento territorial integral seguido por normas y orientaciones técnicas transparentes sobre urbanización y uso de la tierra. Otra área prioritaria es la relativa al

desarrollo eficiente de los mercados agropecuarios y la promoción de la libre competencia. Un compromiso institucional general debe ser el de fortalecer la capacidad normativa del Estado y crear una instancia coordinadora del desarrollo rural a nivel central.

C. Actores

- Ministerios de: Agricultura y Ganadería, Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Economía, Hacienda y Obras Públicas.
- Banco Central de Reserva y Banco Multisectorial de Inversiones.
- Partidos políticos.
- Organizaciones gremiales.
- Grupos de productores agropecuarios.
- Asamblea Legislativa.
- Municipalidades y organizaciones locales.
- Organismos regionales e internacionales de cooperación financiera y técnica.

D. Acciones

A corto plazo

1. Adecuar el presupuesto para financiar la alfabetización de adultos; educación técnica vocacional y de gestión empresarial y; entrenamiento en agronegocios e infraestructura productiva (especialmente caminos rurales), que faciliten el acceso a los mercados y la integración a la economía de sectores rurales aislados.
2. Definir un marco de políticas económicas estable, transparente y que corrija los sesgos antiagrícolas que todavía persisten (cobro universal del IVA, aranceles más uniformes y armonizados con Centroamérica).

3. Mejorar los servicios de información de mercados, de normalización del comercio, establecimiento de pesos y medidas, estándares de calidad y normas sanitarias.
4. Modernizar y aprobar leyes pendientes (forestal y áreas protegidas, libre competencia, ordenamiento pesquero, riego y avenamiento, semillas y plantas y otras) y aumentar la capacidad de las instituciones para que hagan cumplir las leyes.

A mediano y largo plazo

Adecuar la política económica y los servicios productivos (transferencia de tecnología, financiamiento de largo plazo, riego) para apoyar la reconversión productiva y la diversificación de la producción que aumente la productividad de las actividades agropecuarias.

“La nueva cultura empresarial y laboral”

Autores

Antonio Candray, Francisco Castro Funes,
Álvaro Guatemala (Coordinador), Rafael Guido Béjar,
María Elena Lacayo, Marco Tulio Lima, José René Pérez,
Héctor Bernabé Recinos, Leticia Cristina Rivas,
Raúl Torres, Otto Vidaurre.

Propuestas estratégicas

La cultura es un *orden* determinado, una forma como las acciones e interacciones de los grupos sociales llegan a disponerse, para lo cual desarrollan *normas de comportamiento* y *valores compartidos*. Las *normas de comportamiento* son formas de actuar comunes, persistentes y con capacidad de reproducirse a sí mismas, y los *valores compartidos* constituyen objetivos e intereses comunes que orientan y norman los comportamientos de cada grupo específico y que hacen que pervivan aun cuando los grupos cambien.

La nueva cultura empresarial y laboral en El Salvador se monta sobre un doble problema que afecta de manera extraordinaria al trabajo: por un lado, la necesidad de reactivar el desarrollo económico del país y, por otro, la de frenar el desempleo creciente y de largo plazo ocasionado ahora no sólo por la falta de

dinamismo del tipo de desarrollo anterior sino por el hecho que, en la actualidad, el desarrollo de la producción y la productividad, la competitividad y la eficiencia, se basan en tecnologías modernas ahorradoras de fuerza de trabajo. Los nuevos términos de la economía internacional plantean cánones tecnológicos que deben ser observados si un país desea mantenerse en la competencia globalizada, que afectan los niveles de empleo y las regulaciones laborales.

El desempleo no sólo es un problema económico, de eficacia productiva, sino fundamentalmente de cohesión de la sociedad. Esta, al debilitarse, libera fuerzas destructivas tan poderosas como la delincuencia y la criminalidad, la agudización de la corrupción y, en términos generales, la anomia. El desempleo de larga duración es la antesala de la exclusión que rompe a las personas y a las comunidades y las hace perder confianza como ciudadanas.

Las economías que entran a la competencia internacional globalizada reaccionan flexibilizando la economía bajo la hipótesis de que la causa fundamental del desempleo radica en la rigidez de los mercados laborales. Se refieren a:

- (a) Las dificultades que tienen las empresas para expulsar trabajadores frente a la utilización de nuevas tecnologías;
- (b) las limitaciones de los contratos por tiempo determinado y a la jornada parcial a que obliga la nueva organización de la producción y,
- (c) a los costos extrasalariales que se derivan de la seguridad social que son minimizados por esta contienda en el mercado internacional.

De acuerdo con esta hipótesis, la clave para aumentar el empleo radica en la flexibilidad de los mercados de trabajo para modificar sustancialmente el cuadro general de estancamiento y liberar las energías productivas del país. El proceso de flexibilización consiste en tres medidas importantes:

1. *La reforma de leyes* para sustituir el régimen de la negociación colectiva por rama sindical por un sistema más flexible, que permita tomar en cuenta las imposiciones y los requerimientos de la realidad económica.
2. *La desregulación de los sistemas previsionales* que coloca a los beneficiarios del sistema en posición de una completa libertad de elección en materia de cobertura sanitaria y de pensiones.

3. *La modificación del régimen de indemnizaciones laborales.* Al cerrarse el paquete de la flexibilización laboral se estaría en condiciones de avanzar hacia la modernización de las estructuras socioeconómicas y hacia metas identificables de progreso y expansión.

El problema central de esta nueva fase sería entonces, cómo combinar la mayor flexibilidad para el empresario con la mayor seguridad para el trabajador, de tal forma que no haya una pérdida de competitividad de la economía, pero tampoco se provoque factores que no permitan el aumento de empleo o generen mayores niveles de desempleo.

La cultura empresarial y laboral basada en la idea reduccionista de que la fuerza de trabajo es sólo una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda está condenada a desaparecer junto con las empresas que la practican. Ahora, la visión moderna es que la empresa es mucho más que una entidad económica o el trillado espacio para los conflictos entre el capital y el trabajo. De esta manera, el diálogo y la buena comunicación entre los trabajadores y los empresarios se perfila como la base para las empresas exitosas de hoy y del futuro.

La nueva cultura laboral tiene como meta alcanzar una economía sólida, productiva y justa, que reafirme su soberanía en un régimen de libertades y democracia. Los trabajadores y empresarios que adopten la nueva cultura deberán aceptar tres grandes desafíos:

1. Los sindicatos deben transformarse; ser más participativos y propositivos. Deben ejercer su autonomía de manera fortalecida y profundizar y desplegar la democracia en sus organizaciones.
2. Los empresarios y trabajadores deben ver a la empresa como un lugar productivo, donde se humanice el trabajo y, de manera simultánea se pueda alcanzar mayor productividad y eficiencia, mayores salarios y mayor número de empleos.
3. A esta nueva actitud debe corresponder un nuevo desempeño empresarial que cumpla con su función ante la sociedad y sea un lugar de dignificación del trabajo, que se aparte de la idea que las empresas son un lugar para sobreexplotar el trabajo.

El fomento del empleo deber ser prioritario en el diseño de la política económica y social por parte del Estado. Como en tiempos anteriores, mantener empleo para

todos continúa siendo el mejor modo de garantizar la justicia, de atender las aspiraciones populares de participación en la vida económica y social y, de preservar la cohesión social. Además asegura el aprovechamiento de los recursos humanos y del capital. También asegura que pueden elevarse los niveles de vida de amplios sectores de la población y de la tasa de crecimiento de la producción.

En el ámbito de las políticas públicas, es necesario:

1. *Una nueva política del tiempo:*

- El Estado debe gestionar los tiempos sociales para proteger la cohesión social (ocio, identidad, comunidad).
- Norma colectiva del tiempo de trabajo, que permita ajustar el empleo y el volumen de trabajo necesario para el funcionamiento de la economía con contratos adecuados para la seguridad laboral.
- El tiempo debe ser codecidido entre cada trabajador y su empleador, para discutir y evaluar los tiempos de trabajo y de formación.
- Una política del tiempo de la ciudad para una nueva relación con el ocio, es decir una política que afecte favorablemente la educación, la organización cultural, los transportes públicos, la vivienda, los equipos colectivos para mejorar las condiciones de vida.

2. *Una política de revisión de la legislación* para flexibilizar los contratos laborales pero también del marco jurídico de la protección social. Debe avanzarse hacia el “contrato de actividad” que concilia la demanda de protección (continuidad de los ingresos y la protección social) con la debida flexibilidad que exigen las empresas. En el próximo apartado se amplía este punto.

3. *Una política de transparencia y comunicación abierta*, comenzando por liberalizar las estadísticas empresariales y laborales que ahora son tratadas casi como seguridad de Estado.

4. *Políticas eficaces para proteger al país de los flujos financieros* de corto plazo y errabundos que desestabilizan el empleo y el crecimiento económico.

Muchas de estas políticas requerirán de reformas fundamentales en varios ámbitos de la vida social salvadoreña, lo cual significa que la tarea de una nueva

cultura también tiene una dimensión nacional, sin la cual su éxito estará en peligro.

Desde la perspectiva de buscar arraigar una nueva cultura empresarial laboral, sería muy riesgosa la introducción de una normativa flexibilizadora y desregularizadora que ensanche la brecha entre empleadores y empleados y que continúe la antigua cultura de desconfianza mutua e intolerancia. Pero en concordancia a la necesidad de fomento de empleo, concertación salarial y del nuevo bilateralismo activo, una nueva normativa que fortalezca lo nuevo tendría los siguientes rasgos:

1. **Flexibilidad funcional**, que trataría de superar las rigideces que muestra el contrato individual de trabajo en el sentido de vincular al trabajador a un puesto de trabajo. Implica la polivalencia del trabajador desde una perspectiva horizontal, es decir, vinculado al conocimiento de todas y cada una de las etapas del proceso productivo, nunca a situaciones de desmejoría en sus condiciones de empleo o a ser sometido a condiciones que lesionen su dignidad.
2. **Aceptación de la contratación parcial**, que es aceptable para la generación de empleos, siempre que este tipo de contratación no se vuelva el predominante y trate de sustituir al contrato para trabajo permanente y, que impida que el trabajador parcial acumule antigüedad con el mismo empleador bajo la figura de trabajador permanente discontinuo.
3. **Fomento a la negociación colectiva** entre gremiales empresariales y federaciones o confederaciones sindicales por rama de actividad económica. Así, se potenciaría la contratación como instrumento para establecer condiciones laborales salariales.
4. **Reforma del juicio individual de trabajo**, que es una alternativa para acelerar la solución de conflictos laborales individuales. El proceso individual de trabajo, independientemente de su cuantía, podría reducirse a dos audiencias específicas. La primera de conciliación, que si no logra el arreglo entre las partes daría paso a la segunda, la audiencia de juicio, donde cada parte debe presentar las pruebas y alegatos necesarios para posteriormente dictar sentencia.

“La profundización de la reforma del Sistema Judicial”

Autores

Ivo Priamo Alvarenga, Nelson García Córdova,
Benjamín Cuéllar, Aronette Díaz, Arturo Méndez Azahar,
Florentín Meléndez (Coordinador), Francisco Eliseo Ortiz Ruiz,
René Madecadel Perla Jiménez,
Rommell Sandoval, Felipe Francisco Umaña.

A. Diagnóstico sobre la administración de justicia

La administración de justicia en El Salvador se ha caracterizado por:

- (a) La falta de independencia y de capacidad para investigar y castigar violaciones de los derechos humanos. El sistema ha estado subordinado a intereses de grupos de poder.
- (b) Un alto nivel de corrupción que ha generado impunidad, injusticia e inseguridad jurídica.
- (c) La retardación de la justicia.
- (d) La concentración excesiva de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia y especialmente en su Presidente.

- (e) La carencia de una real carrera judicial y por las deficiencias en el proceso de selección y nombramiento de los jueces y magistrados de segunda instancia y de la misma Corte Suprema de Justicia.
- (f) La falta de credibilidad de la población.

A esta fecha se han observado avances en materia de independencia judicial respecto a los demás Órganos del Estado y en materia de independencia económica y funcional, pero aún subsisten signos que no permiten afirmar que se ha superado plenamente este problema.

Se han realizado esfuerzos y se han tomado medidas en contra de la corrupción, pero han sido muy tímidas y poco eficaces.

Con las reformas legislativas hechas con posterioridad, se han superado algunos problemas, pero falta profundizar en las reformas y perfeccionar la carrera judicial.

B. Importancia en la administración de justicia

La administración de justicia es de vital importancia en la vida de la nación, ya que constituye un factor determinante para la protección y vigencia efectiva de los derechos humanos de toda la población. Constituye la piedra angular de la protección de la persona humana “como el origen y el fin de la actividad del Estado” y es la base fundamental para el establecimiento de la seguridad jurídica en el país, garantizando la legalidad de la administración pública y el control jurisdiccional de los actos y decisiones del Estado. La administración de justicia es un componente de todo plan de desarrollo nacional y constituye la más importante garantía de la democracia y del Estado Constitucional de Derecho.

C. Objetivo general de la reforma judicial

En definitiva, con los cambios propuestos se pretende lograr que El Salvador cuente con una administración de justicia accesible, transparente, igualitaria, pronta y eficaz, capaz de generar credibilidad y confianza en la población.

D. Los cambios propuestos

Los cambios y reformas propuestas por la mesa especializada número nueve son de índole normativa (corto plazo), insitucional (mediano plazo) y cultural (largo plazo).

D.1. Cambios normativos

Se propone una revisión integral de la Constitución, la reactivación y vigencia plena de tratados internacionales y, la adecuación de la legislación secundaria a la Constitución a la normativa internacional vigente y a la realidad salvadoreña.

Se hace énfasis, entre otros aspectos, en la necesidad de asegurar a nivel constitucional: (i) el principio de legalidad y de responsabilidad del Estado; (ii) la separación efectiva de los Órganos del Estado; (iii) la independencia judicial; (iv) el reconocimiento de los derechos de las víctimas; (v) la colegiación profesional y, (vi) el traslado al Consejo Nacional de la Judicatura de la administración de la carrera judicial.

A nivel legislativo se propone unificar la legislación sobre el sector justicia; garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres; y modernizar leyes obsoletas, introduciendo los principios del juicio oral.

D.2. Cambios institucionales

Se proponen mecanismos eficaces para fortalecer instituciones estratégicas del sector justicia y la carrera judicial; impulsar medidas para prevenir y combatir la corrupción y la retardación de la justicia; crear nuevas instancias jurisdiccionales; fortalecer la independencia de las instituciones de control y supervisión del aparato del Estado y, fortalecer la capacidad técnica y el ejercicio ético de los operadores del sistema.

D.3. Cambios culturales

Se propone establecer un programa permanente de educación legal básica para la población; una profunda revisión de la carrera de Ciencias Jurídicas en las universidades; fomentar y estimular la participación ciudadana en la problemática de la justicia; promover la cooperación de los medios de comunicación, de las asociaciones de abogados y de las ONG's con las instituciones del sector justicia en el proceso de educación legal popular y, promover la resolución pacífica de conflictos mediante el funcionamiento de la vía jurisdiccional o de vías alternativas de solución.

E. La Estrategia

Se sugiere una estrategia que permita que las propuestas sean sometidas a consulta ciudadana, especialmente de las instituciones involucradas y los operadores del sistema, y que se logre persuadir a la clase política y a los Órganos del Estado para su implementación.

“Ética en El Salvador”

Autores

Rafael Argueta Montes, Julia Evelin Martínez (Coordinadora),
Armando Oliva, Óscar Picardo Joao, Pedro Roque,
Orlando de Sola, María Elena Sol, Knut Walter, Ernesto Zelayandía.

A. Objetivo estratégico

Reconstruir nuestro Estado-Nación sobre el fundamento de la ética. Esto es, una sociedad conformada por hombres y mujeres que asuman y practiquen la ética, entendida como el conjunto de valores, creencias, actitudes y acciones que constituyen los imperativos morales que conducen a la convivencia armónica.

B. Propuestas estratégicas

1. Transformar la educación en un instrumento para la realización del potencial ético de los salvadoreños y salvadoreñas.
2. Reorientar la actual política social del Gobierno para trascender de la visión reduccionista hacia una visión integral, que prevenga y supere las causas de la pobreza en nuestro país.

3. Creación de un Código Empresarial basado en la ética y los principios del Desarrollo Sostenible.
4. Incorporar dentro de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social los principios, objetivos e instrumentos del Desarrollo Humano Sostenible.
5. Promover la concertación en torno a una estrategia que enfrente el deterioro ambiental con participación de todos los actores nacionales.
6. Elaborar e implementar un Código de Ética para la Función pública.
7. Convertir las políticas gubernamentales en verdaderas políticas públicas al servicio de la Nación y no de intereses particulares.

C. Compromisos necesarios

Los compromisos necesarios para la toma e implementación de las propuestas anteriores son los siguientes:

Propuesta 1:

Profundizar y ampliar el actual proceso de Reforma Educativa para promover la interiorización y práctica de los valores al plano de la vida cotidiana y a todos los niveles del sistema educativo formal y no formal (área cultural/educativa).

Propuesta 2:

- (a) El Gobierno debe asumir como tarea prioritaria del Estado-Nación la reorientación de la Política Social (área política).
- (b) Los partidos políticos y la sociedad civil deben monitorear el cumplimiento de la tarea de reorientación de la Política Social (área política y área de participación ciudadana).

Propuesta 3:

- (a) Las gremiales empresariales deben asumir la responsabilidad de elaborar e impulsar el cumplimiento del Código Empresarial entre sus miembros e incluirlo dentro del contenido de sus Estatutos (área institucional).

- (b) Las organizaciones de la sociedad civil deben comprometerse a dar seguimiento al cumplimiento del Código (área de la participación ciudadana).

Propuesta 4:

- (a) El nuevo Gobierno debe asumir el compromiso de reorientar la Política Económica e incorporar en ella los principios, objetivos e instrumentos del Desarrollo Humano Sostenible (área política).
- (b) Los partidos de oposición deben comprometerse a monitorear y evaluar la gestión gubernamental desde la perspectiva del Desarrollo Humano Sostenible (área política).

Propuesta 5:

- (a) Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben comprometerse en trabajar de manera coordinada en torno a los grandes temas y objetivos del medio ambiente (área institucional).
- (b) El Gobierno debe comprometerse a fortalecer la capacidad institucional de las entidades responsables de velar por los problemas del medio ambiente (área política y área institucional).
- (c) Debe crearse el Sistema Nacional de Vigilancia del Medio Ambiente (área institucional).

Propuesta 6:

- (a) El Gobierno debe asumir como tarea prioritaria la creación del Código de la Función Pública y la creación de la oficina encargada de velar por su cumplimiento (ámbito político/institucional).
- (b) Los partidos políticos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil deben apoyar esta iniciativa y presionar por su efectivo cumplimiento (ámbito político/ámbito de la participación ciudadana).
- (c) Las organizaciones de empleados públicos deben comprometerse a adoptar el Código de Ética (área política y área social).

Propuesta 7:

- (a) El nuevo Gobierno debe comprometerse a insitucionalizar mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas (ára política y área insitucional).

- (b) En este sentido, la sociedad civil debe participar en la discusión y definición de las políticas públicas.
- (c) El nuevo Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil deben asegurar la independencia y la capacidad de las instituciones de control de las actividades del Estado y del sector privado (área política y área social).

D. Actores principales

Los actores principales que se identifican para la toma de los acuerdos y compromisos anteriores son los siguientes:

Actores Políticos: Partidos políticos y Sociedad Civil.

- Actores Económicos: Gremiales de la micro, pequeña, mediana y gran empresa.
- Actores sociales: Organizaciones de trabajadores, gremios de profesionales, organizaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunales, medios de comunicación social, iglesias y movimientos espirituales.
- Actores institucionales: Órganos Ejecutivos, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y gobiernos municipales.

E. Acciones y plazos

Para avanzar en los compromisos que plantean las propuestas estratégicas de la “Ética en El Salvador” se propone el período 1999-2005.

El plan de acción en este sentido debería contemplar tres niveles para la concreción de los acuerdos y compromisos: corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

En el corto plazo -menos de un año- la actividad principal debería ser la conformación de comisiones de alto nivel y con liderazgo moral para elaborar las propuestas específicas que corresponden a cada una de las propuestas estratégicas y, para facilitar la consolidación de los compromisos y acuerdos específicos. Esta

actividad debería estar bajo la responsabilidad del Gobierno y de la Comisión Nacional de Desarrollo.

En el mediano plazo -1 a 3 años- deberían ser implementados los acuerdos y compromisos logrados en la fase anterior: elaboración y aplicación de Códigos de Ética de la Función Pública y del Código Empresarial; ejecución del proceso de revisión del contenido de Ética en la Reforma Educativa; redefinición de contenidos e instrumentos de la Política Social y Política Económica, entre otros.

En el largo plazo -3 a 5 años- la acción principal deberá consistir en la evaluación y retroalimentación de los procesos de cambio iniciados, con miras a garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

“Reforma fiscal y priorización de la inversión pública”

Autores

Rafael Alvarado Cano, César Alvarado Reyes,
Óscar Edmundo Anaya, Ricardo Cardona, Edmundo Chinchilla,
Miguel Antonio Chorro (Coordinador), Paulino Delgado Valle,
Claudio De Rosa, Mauricio Funes, Francisco Lazo,
Óscar Edgardo Melhado, Nolvía Saca, Irving Tóchez.

A. Propuestas estratégicas

1. Mantener un marco de disciplina fiscal en el mediano y largo plazo, para que prevalezca el clima de estabilidad macroeconómica que se ha alcanzado en años recientes. Esto incluye el mantenimiento de niveles de endeudamiento consistentes con la capacidad de pago del Gobierno.
2. Implementar reformas para elevar el esfuerzo tributario del país a por lo menos un 14-15 por ciento del PIB. Ello implica ampliar la base tributaria incorporando al sector informal, aumentar la eficiencia en la recaudación, reducir las distorsiones en la estructura de impuestos provocadas por las exenciones al IVA y, reducir los elevados niveles de evasión fiscal.
3. Eliminar funciones y gastos innecesarios del gobierno y desligar al sector público de actividades que el sector privado podría desempeñar más

eficientemente, en un marco de priorización de funciones y evaluación de resultados.

4. Descentralizar la gestión fiscal hacia los municipios. Para lograr la armonización de la política fiscal y el desarrollo municipal es necesaria una definición clara tanto de las responsabilidades específicas como de las áreas de complementariedad entre el gobierno central y las municipalidades. La descentralización no debe desincentivar a los agentes productivos ni generar distorsiones, ineficiencia recaudatoria o visos de doble tributación.
5. Reorientar los recursos públicos hacia inversiones prioritarias, particularmente en el área social y de infraestructura, a fin de alcanzar la necesaria acumulación de capital físico y humano que sirva de base al crecimiento sostenible en el largo plazo. En esta estrategia, la participación del sector privado y de organizaciones no gubernamentales puede ser un mecanismo efectivo para llevar a cabo tal tarea. Asimismo, debe haber un proceso de evaluación de factibilidad anterior y posterior a la realización de las inversiones sociales, en el marco de lo que podría ser un Programa Nacional de Inversiones.

B. Compromisos necesarios

1. Para *mantener un marco de disciplina fiscal en el mediano y largo plazo* es fundamental un compromiso político que pueda incluir la prohibición a nivel constitucional de financiamiento del gasto público por parte del Banco Central de Reserva, así como la armonización de compromisos entre los Órganos del Estado para mantener un horizonte de estabilidad económica, particularmente en aquellos decretos legislativos con impactos fiscales. Además, la elaboración, ejecución y evaluación de presupuestos multianuales, con claras responsabilidades por parte de los ministerios de acuerdo al cumplimiento de metas programadas.
2. Las *reformas para elevar el esfuerzo tributario del país* deben ir acompañadas de: (i) la creación de una cultura de pago de impuestos y de una cultura gerencial de los servidores públicos que estimule el ahorro y; (ii) la revisión de las Leyes tributarias por parte del Ministerio de Hacienda, los principales gremios representativos de la empresa privada y la Asamblea Legislativa.
3. En el diseño de la estrategia para *eliminar funciones y gastos innecesarios del gobierno* debe incluirse la revisión de la Ley del Servicio Civil y concertar un

esfuerzo multisectorial para definir el rol estratégico del Estado, su modernización y las funciones que pueden ser desligadas y asumidas por el sector privado.

4. Con el propósito de *descentralizar la gestión fiscal hacia los municipios* se requiere: (i) programar y ejecutar un plan de capacitación de los administradores municipales; (ii) uniformizar los mecanismos de cobro ya existentes entre el Ministerio de Hacienda y los municipios; (iii) la coordinación estratégica entre el Gobierno Central y los gobiernos municipales y, (iv) la cesión parcial de impuestos para que los administren los municipios.
5. En la *reorientación de los recursos públicos hacia inversiones prioritarias* es imprescindible la creación e implementación de un Sistema Nacional de Inversión Pública, así como de una Ley de Compras y Suministros. En la racionalización y evaluación de proyectos es fundamental la participación del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, a efecto de ejercer la contraloría necesaria y, eliminar aquellos subsidios cuyo costo fiscal sea mayor que el beneficio social neto.

C. Actores principales

- Asamblea Legislativa, partidos políticos, Gobierno Central, gobiernos municipales.
- Gremios de la empresa privada, patrocinadores externos de los programas de capacitación (Banco Mundial, BID, PNUD y otros).
- Organizaciones no gubernamentales, colegios de profesionales, intelectuales y otras expresiones de la sociedad civil.
- Ministerio de Hacienda, Corte de Cuentas.

D. Acciones y plazos

Las primeras acciones deberían concentrarse en la divulgación y discusión de la propuesta estratégica con los actores principales. Un paso inmediato es la revisión y modificación de normas y procedimientos que simplifiquen la inscripción de nuevos contribuyentes, así como la revisión de leyes que

armonicen la recaudación, eliminen distorsiones y aumenten la eficiencia. En función de la ampliación de la base tributaria a 14-15% del PIB, el plazo para ascender en ese esfuerzo de recaudación se estima en 5 años; en este mismo plazo se ubican las reformas legales e institucionales. Otras acciones, como la implantación de la cultura de pago de impuestos, una cultura de gestión pública que estimule el ahorro y la sostenibilidad de los municipios sobre la base de la recaudación es posible lograrlas en un plazo de quince años.

“Medio ambiente y desarrollo”

Autores

Yvette Munguía de Aguilar, Fabricio Brutti,
Carlos Cromeyer, Rafael Ernesto Góchez,
Herman Rosa (Coordinador), Ricardo F. Vásquez.

Propuesta de compromisos para superar los desequilibrios territoriales y la crisis socioambiental

El Salvador está inmerso en una crisis socioambiental que se manifiesta en el deterioro de las condiciones de vida de grandes estratos de la población, la degradación y agotamiento de los recursos naturales renovables. Esta crisis tiene en la base los desequilibrios territoriales que se expresan en patrones concentradores de localización de población; en agudas desigualdades en el consumo de bienes y servicios ambientales y, en la desigual presencia y cobertura de servicios sociales básicos e institucionales. Por lo tanto, desarrollar e institucionalizar una acción colectiva capaz de revertir los desequilibrios territoriales y la crisis socioambiental es un desafío ineludible. Ello demanda compromisos en torno a dos aspectos fundamentales:

- A. *Reordenamiento territorial-ambiental y reconversión productiva*, como base para el establecimiento de unidades territoriales o regiones sostenibles en los ámbitos económicos, social y ambiental; y

B. *Reforma institucional y gestión ambiental participativa* que logre establecer el marco de una relación diferente entre el Estado, sectores productivos, la sociedad civil y la cooperación internacional.

A. Reordenamiento territorial-ambiental

1. *Ordenar el desarrollo dentro de la Región Metropolitana de San Salvador (RMSS)*. Ello supone reducir su carga contaminante y maximizar la capacidad de la propia región para proveerse de recursos naturales como suelos fértiles, agua y aire limpios.
2. *Establecer una nueva relación entre la RMSS y las demás regiones del país*. Esta región, al concentrar población, infraestructura, inversiones, instituciones y poder, ha establecido relaciones depredadoras y altamente desiguales con el resto de las regiones. Una nueva relación supone reducir los impactos negativos sobre ellas y reconocer los aportes ambientales y de otra índole que recibe la región metropolitana, con flujos tangibles de inversiones y otros recursos que apoyen la viabilidad económica, social y ambiental de las otras regiones.
3. *Incorporar criterios ambientales, sociales y económicos en las propuestas de regionalización*. Esto supone ir mucho más allá de los aspectos puramente administrativos, para favorecer el establecimiento de un sólido tejido social y productivo en las distintas regiones que posibiliten la reconversión económica, el avance social y la recuperación ambiental.
4. *Promover las relaciones horizontales de intercambio y cooperación entre las distintas regiones*. Lo que supone romper con el aislamiento histórico que algunas de ellas mantienen entre sí, mediante un replanteamiento del sistema de ciudades, de la red vial y de otras obras de infraestructura de sedimentos que afectan cauces y embalses, así como las zonas de riesgo, tanto en las partes altas (incendios y deslaves) como en las partes bajas (inundaciones).
5. *La biodiversidad y el sistema nacional de áreas protegidas*. La protección de la *biodiversidad* deberá involucrar, además del Estado, a los actores locales que tienen relación directa con el uso y preservación de los recursos naturales, tanto en las áreas protegidas como en sus zonas de amortiguamiento e influencia, llenando vacíos en lo referente a recursos genéticos y biotecnología. *La reorganización de la región costera y el manejo sostenible de los ecosistemas costero marinos* es un aspecto importante para aprovechar

la diversidad biológica de los ecosistemas costero marino que representan una de las mayores riquezas del país.

B. Reforma institucional y gestión participativa para el desarrollo sostenible

La reforma institucional y la gestión participativa son claves para la gestión ambiental.

Algunos elementos a tomar en cuenta son los siguientes:

- (a) La reforma institucional debe favorecer el restablecimiento del tejido social -desgarrado por el conflicto armado- y volverlo estable y productivo en distintas regiones. Ello posibilitaría la reconversión económica, el desarrollo social y la recuperación ambiental.
- (b) Debido a que existen diferentes propuestas metodológicas para el reordenamiento territorial, expresadas en microregiones conformadas a partir de la división político-administrativa, cuencas hidrográficas, unidades territoriales de producción y uso de los recursos naturales del territorio, es necesario articularlas y ubicar la función que cada una de ellas podría cumplir en la política ambiental.
- (c) La nueva institucionalidad deberá contar con un marco jurídico que favorezca y estimule la iniciativa ciudadana y la organización de los actores en sus territorios, como mecanismo democrático y vía de solución de problemas.
- (d) Se debe institucionalizar un nuevo tipo de relaciones entre la sociedad civil, el Estado y la cooperación internacional, a través de espacios sociales y organizativos que bajo la forma de un Sistema de Gestión Ambiental Participativa -que incluya un sistema de prevención contra desastres- formule e implemente *un plan nacional de coordinación territorial-ambiental que garantice las ofertas ambientales y productivas sobre la base de las capacidades de soporte de cada territorio.*

“Reforma del sistema de salud”

Autores

Herbert Betancourt (Coordinador), Héctor Castaneda,
Celina de Choussy, Eduardo Espinoza, Herbert Guzmán,
José Ascención Marinero, Ana Isabel Nieto, Sonia Parada de Orellana,
Margarita Posada, María Isabel Rodríguez,
Zoila Marina Torres de Guadrón, Alcides Urbina,
José Ruales, Roberto Badía, aportes desde mesa 17 de Washington, D.C.

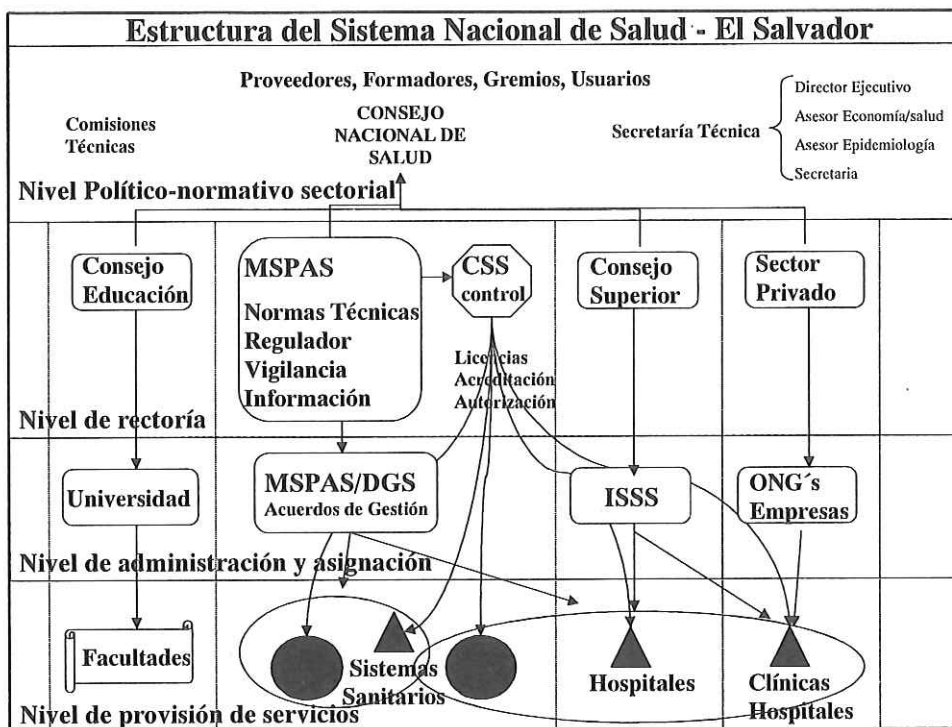
A. Propuestas estratégicas

1. Estructura del sistema

Ver cuadro en la siguiente página.

(a) Nivel Político Normativo Sectorial

Este nivel corresponde al CONSEJO NACIONAL DE SALUD, una entidad colegiada, multisectorial, autónoma, generadora de las políticas sectoriales y de las normativas generales que regirían en todo el Sistema. Este Consejo Nacional ejercerá la visión estratégica del sector y tendrá como fin último la defensa del derecho a la salud de todos los salvadoreños y salvadoreñas.



Se formaría con diez miembros, todos ellos funcionarios del más alto nivel de sus respectivas instituciones. Estas son: Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Colegio Médico, universidades (facultades de medicina y otras ciencias de la salud), Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, COMURES, ONG's, sector privado, Consejo de Educación Superior (MINED), Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

Para la operativización de sus atribuciones se apoyaría en una dirección ejecutiva (Profesional de la Salud Pública) y en dos subdirecciones (Economía de la Salud y Epidemiología). Para el desarrollo de sus tareas de campo se integrarían equipos técnicos idóneos contratados para períodos específicos.

(b) Nivel de Rectoría

Ejercida por el MSPAS sobre las demás instituciones sectoriales incluidas: Seguridad Social, la entidad que represente al sector privado con o sin fines de lucro y el CSSP. Con el Consejo de Educación Superior se establecerá estrecha coordinación para ejercer las normativas a nivel de todas las instituciones

académicas públicas y privadas para conducir la política de formación de recursos humanos.

En este nivel se establecerían las normas técnicas que regularían el funcionamiento, la vigilancia y el control de las instituciones que integran los otros dos niveles. El CSSP mantendría sus atribuciones en cuanto al otorgamiento de las licencias de ejercicio profesional, acreditación y autorización de prestación de servicios.

(c) Nivel de Administración y Asignación

Aquí se ubican las instancias técnico administrativas que mediante “acuerdos de gestión” gerencian todos los recursos disponibles para el sector y tienen la responsabilidad de la prestación de servicios de salud en los niveles operativos.

(d) Nivel de Provisión de Servicios

Lo integran la red de establecimientos del Ministerio de Salud y del ISSS a nivel nacional; las clínicas y hospitales privados; instituciones con o sin fines de lucro, y otras facilidades del sector, incluida la amplia red de dispensarios, casas de salud, farmacias comunitarias y otras relacionadas con los promotores de salud. El desempeño de sus responsabilidades estará en apego a “acuerdos de gestión” diseñados y negociados con el nivel administrativo. La participación ciudadana en el establecimiento de los términos específicos de los acuerdos de gestión es de suma importancia, puesto que esta es la base sobre la cual se establece el control ciudadano y la evaluación de desempeño de cada establecimiento que brinda atención al público.

Las universidades y otras instituciones de enseñanza superior en el campo de las ciencias de la salud tendrán su correspondiente operativo en este nivel, en las facultades de medicina, y otras instituciones de educación superior en el campo de la salud.

Adicionalmente a lo descrito arriba, son consustanciales a la propuesta de reforma, el desarrollo de políticas específicas que den el soporte necesario al proceso, entre estas se consideran:

- (a) Desarrollo de los recursos humanos y de la capacidad científico técnica.
- (b) Política de medicamentos.

- (c) Creación de un fondo nacional de solidaridad en salud.
- (d) Estructura del marco legal.

B. Compromisos necesarios

La Reforma del Sistema de Salud como proceso trascendente y de gran magnitud demanda de requisitos fundamentales:

1. Una Política de Estado que delimite con claridad la naturaleza y alcance de la Reforma, sus valores y principios rectores.
2. La seguridad de un compromiso financiero que permita la sostenibilidad del Sistema.
3. Esfuerzo colectivo y concertado, que articule la participación sectorial de salud y de la población, mediante un acuerdo social.

C. Actores principales

La producción de salud está íntimamente ligada al desarrollo integral de toda la sociedad. El bien salud depende tanto del desarrollo y crecimiento económico, como del desarrollo social, político, cultural y ecológico. A su vez, la salud de la población es básica para garantizar el desarrollo económico, el bienestar y el desarrollo humano.

El proceso de reforma de salud identifica entonces como actores principales a: las comunidades organizadas y participantes, las instituciones y gremios del sector y a las autoridades con el poder político y de decisión a nivel del Estado.

D. Acciones y plazos

Este es un proceso que requiere de mediano y largo plazo, para su maduración y establecimiento. Sin embargo, los beneficios concretos de las acciones apropiadas impulsadas de inmediato deberían concretizarse en niveles progresivos de mejoría en el nivel de salud de la población en general y, evidenciados por los indicadores específicos.

“Estrategia nacional de vivienda”

Autores

Carolina Afane, Jesús Amado Campos, Efraín Fuentes Alvarenga,
Alfonso Antonio García Rivera, Alejandro González, Carlos Heymans,
Brian Holst, Edín Martínez (Coordinador), Marta Elizabeth Murcia,
René Mauricio Quintana, Bruno Enrique Tenze Trabanino.

A. Objetivos generales de la estrategia

1. Promover una recomposición profunda del esquema institucional actual, relacionado con la vivienda, que permita romper las barreras que impiden al sector de población históricamente marginado el acceso a un habitat digno.
2. Abatir y supera el alto déficit actual de vivienda, con equidad social (sin distingo de sectores) y territorial (rural y urbano).

B. Factores que inciden en el problema de la vivienda

B.1. Factores económicos

1. *Reorientación equitativa del gasto público.*

La inversión pública en infraestructura vial e hídrica (orientada al sector formal, medio y alto) debe mantenerse en el presupuesto, pero reorientada a

los sectores históricamente marginados, y debe ser equitativa en la distribución territorial. Esto será suficiente para eliminar el déficit en 20 años.

2. *Inversión en infraestructura.*

La inversión estatal debe incrementar la infraestructura y servicios básicos, que es donde está la carencia más importante de la vivienda popular, rural e informal.

3. *Inversión para la vivienda popular.*

Además de reorientar la inversión pública a la infraestructura de la vivienda popular, en el presupuesto deben asignarse subsidios para la vivienda misma. Este subsidio es imprescindible si se quiere ayudar a combatir la pobreza y la pobreza extrema.

4. *Accesibilidad a créditos para el sector informal.*

Deben crearse, con el respaldo del Estado, “fondos de garantía” que aseguren al sistema financiero la recuperación de los préstamos que se otorguen a individuos o grupos del sector informal.

5. *Estrategia financiera para el sector formal.*

Apoyar los esfuerzos de acción de la empresa privada y ONG'S, para lograr una oferta suficiente para las familias con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Esto se logra: (i) eliminando trámites, pagos y burocracia innecesaria; (ii) subsidiando las soluciones para estas familias; (iii) bajando las actuales normas “mínimas” y, (iv) promoviendo la vivienda progresiva. Para lo anterior debe modernizarse el FSV, permitiéndole subsidiar intereses.

6. *Estrategia financiera para el sector informal.*

Además de las propuestas para el sector formal que sean aplicables, deberá adoptarse y fortalecerse la solución progresiva, valorando y complementado el aporte de la familia. Se deben mejorar y dotar de recursos a las instituciones que -como FONAVIPO y las alcaldías- atiende la vivienda informal.

B.2. Factores técnicos

1. *Promover el uso de materias tradicionales.*

Promover la construcción con materiales tradicionales, tales como bahareque, adobe, tapia, etc., permitiendo que sean aceptados por los organismos financieros, pero que no encarezcan la vivienda.

B.3. Factores territoriales

1. *Promover un plan de ordenamiento territorial con su respaldo legal.*

Establecer un régimen de uso y tenencia del suelo que reduzca la especulación y facilite la accesibilidad para vivienda popular. Para ello debe aumentarse la densidad y establecerse impuestos que estimulen la utilización del suelo.

B.4. Factores ambientales

1. *Medidas ambientales fuera del contexto general.*

Desarrollar un plan de ordenamiento, promoción y control ambiental que contenga la medición de impactos y mitigaciones. No deben pedirse estudios de impacto ambiental a cada proyecto, sino que debe obligarse a cada uno a cumplir las normas de cada zona y quitar a las alcaldías la posibilidad de vender las áreas verdes.

2. *Mal manejo de la evacuación de desperdicios.*

Desarrollar planes integrales de tratamiento de los sólidos y líquidos a nivel regional, municipal y estatal. El pago del tratamiento no debe aplicarse únicamente a asentamientos nuevos.

3. *Uso desmedido de leña.*

Asegurar a las comunidades los servicios vitales como electricidad y vías de acceso; se debe promover el uso de tecnología apropiada como turbacocinas; evitar el uso de materiales que demandan leña en su fabricación, como el ladrillo de barro artesanal y, otorgar subsidios para uso de fuentes de energía solar y/o sólida.

C. Aspecto legal normativo

1. *Eliminación de normativa marginadora y que destroza el medio ambiente.*

Deben eliminarse las normas y procedimientos que -al obligar a densidades bajas, al pedir requisitos caros, al exigir trámites innecesarios y al permitir discrecionalidad de los funcionarios- destrozan el medio ambiente, arrasan la tierra agrícola y encarecen las soluciones, alejándolas de los pobres y obligando a los lotificadores a irse a lo ilegal.

También es necesario promover la inscripción en el registro de la propiedad del arrendamiento con promesa de venta y no impedir, como en la actualidad, la inscripción de los lotes de colonias ilegales que ya cuentan con escritura de compra-venta. Establecer densidades mínimas en lugar de máximas.

2. *Planes sin sustentación técnica financiera.*

Antes de implementar las principales propuestas del PLAMADUR y de los planes de D.U futuros, debe hacerse un análisis de costo-beneficio y uno de impacto ambiental.

3. *Aprovechamiento del valor de las inversiones de la comunidad.*

Deben establecerse los mecanismos legales que permitan que la plusvalía de la tierra que genera la inversión del Estado y de los privados, no sólo la aproveche el propietario de la tierra sino la sociedad.

D. Aspecto institucional

1. *Debilidad institucional, falta de liderazgo y de voluntad política.*

Se debe establecer un marco legal-institucional que facilite y que no retrase la actividad constructiva, con una coordinación fuerte y un adecuado soporte técnico. Es necesaria una institucionalidad con suficiente poder y presupuesto, participativa y descentralizada, que llegue a los sectores tradicionalmente marginados. Por otro lado, en los municipios pequeños y medianos las autoridades locales deben estar involucradas en la solución de la vivienda popular.

2. *Falta de una política integral y real de vivienda.*

Es necesario crear una política, con planes y estrategias, bajo una concepción de proceso, que sea capaz de generar una sinergia entre todos los sectores; que, teniendo en cuenta la limitación de recursos, logre la solución progresiva al problema, en el corto, mediano o largo plazo. Este plan debe llegar al detalle posible en objetivos, políticas, estrategias, metas y financiamiento con sus cifras fuentes.

3. *Burocracia y corrupción.*

La normativa del desarrollo urbano debe evitar la discrecionalidad del funcionario y priorizar la regulación con base técnica y objetiva. Debe erradicarse todo trámite innecesario que incremente el tiempo y costo.

E. Compromisos y actores principales

Todas las propuestas antes planteadas implican la creación y/o modificación de normas, planes, procedimientos, instituciones y presupuesto. El compromiso de realizar estos cambios debe lograrse de las máximas instancias del Ejecutivo y Legislativo.

F. Acciones y plazos

Generar una consulta más amplia sobre los aspectos más relevantes de cada área, para que la ciudadanía se pronuncie en relación a ellos, de tal manera que no quede a discreción de los funcionarios públicos la puesta en práctica de dichos aspectos.

“Educación, cultura y deporte”

Autores

María Luisa Angulo, José Adolfo Araujo,
Blanca Flor Bonilla, Ricardo Bracamonte (Coordinador),
Luis Croquer, José Roberto Hernández, Alexandra Hill (Coordinadora),
Miguel Huevo Mixco, Silvia Lorena López Trejo, José Mauricio Loucel,
Violeta Muñoz, Luis Ernesto Ríos, Julio César Rivas Trujillo,
Norma Romero, Joaquín Samayoa, Juan A. Valiente.

Propuestas estratégicas

El objetivo de las propuestas estratégicas planteadas por esta mesa es que se logre la formación de un hombre y mujer integrales. Ese es el corazón de los tres temas que le dan el nombre a la mesa; sin embargo, por cuestiones metodológicas, los autores decidieron abordar cada tema por separado, sin olvidar por ello la dimensión humana que les da sentido.

La pregunta generadora que resume el planteamiento central es ¿De qué manera la educación, la cultura y el deporte pueden ser considerados en nuestra sociedad como elementos fundamentales para el desarrollo integral del país?

A. Educación

Los criterios básicos sobre los cuales se plantean las estrategias son: cobertura, calidad y sostenibilidad.

Estrategias :

1. Asegurar compromisos entre las diferentes fuerzas económicas, sociales y políticas para destinar recursos financieros al sector.
2. Ampliar la oferta educativa a población en edad de trabajar (10 y más años).
3. Elevar la calidad de la oferta educativa dentro de un ambiente de estabilidad, libertad, competencia y democracia.

Para esto es necesario fundamentalmente:

1. Cobertura.

(i) La cobertura básica y media deben garantizarse en un 100%, focalizando esfuerzos donde mas se necesite, a través de diferentes medios; (ii) formular y garantizar la aplicación de políticas compensatorias en beneficio de familias indigentes, para que sus hijos se mantengan dentro del sistema educativo; (iii) acción coordinada de salud y educación, (iv) continuar y profundizar esfuerzos de descentralización con participación real de la población y, (v) asignar aulas y docentes, principalmente al área rural y a escuelas con altas tasas de alumno/maestro.

2. Calidad.

(i) Mejoramiento del sistema de administración docente. Esto implica: sistema de selección y contratación, desarrollo profesional, política salarial, supervisión y reconocimiento social; (ii) modernización del marco legal para establecer un sistema de incentivos al rendimiento docente, con estándares de calidad; (iii) proceso continuo de mejora curricular; (iv) generalizar el uso de tecnologías de información como objetivo y recurso del proceso de enseñanza aprendizaje; (v) crear redes de educación no formal por áreas de acción para focalizar esfuerzos, racionalizar recursos y garantizar mejores resultados, enfatizando los sistemas alternativos para educar; (vi) coordinar esfuerzos para atender las distintas causas de la violencia estudiantil; (vii) escuela, comunidad y municipalidad deben vincularse para ofrecer programas a niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

3. *Sostenibilidad.*

(ii) Incrementar significativamente los niveles de inversión en educación; (ii) establecer un marco legal que facilite e incentive la inversión de la empresa privada en esta área; (iii) establecer un marco regulatorio para la educación no formal y diversificar sus fuentes de financiamiento; (iv) integrar a medios de comunicación, empresa privada y gremios profesionales en el compromiso nacional de educación.

B. Cultura y desarrollo¹

Esta discusión partió del supuesto que el Desarrollo es un reto que obliga a conjugar en su diversidad a todos los elementos que conforman el complejo sistema social y cultural de nuestra realidad, tangible e intangible, asumiendo desde esta óptica que el desarrollo es un proceso complejo que engloba el quehacer económico, político, social y cultural.

Lo anterior se refuerza con la definición de cultura presentada por la UNESCO en la Declaración de México el 6 de agosto de 1982, la cual sostiene que la cultura es... “un conjunto de trazos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Engloba las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Basándose en estos planteamientos y en la falta de conciencia que existe en nuestra sociedad respecto a la importancia de las artes como elemento esencial en la conformación de nuestra cultura, de nuestra identidad y como necesidad prioritaria para el desarrollo, se proponen las siguientes estrategias:

1. Crear una política nacional de cultura, coherente e integradora, que contribuya al desarrollo en armonía con las necesidades de todos los ciudadanos.
2. Crear las instituciones idóneas para el desarrollo y gestión cultural, y mejorar las existentes.
3. Integrar las artes como elemento fundamental e indispensable en los programas educativos formales y no formales.

¹ / Este apartado contempla los resultados generados por un grupo representativo del sector artístico en respuesta a la convocatoria especializada sobre arte, la cual fue llevada a cabo el 24 de octubre de 1998.

Para esto se necesita:

1. *Política Nacional de Cultura.*

(i) Asignar por lo menos el 0.5 del PIB al desarrollo cultural²; (ii) crear condiciones para que las artes tengan una repercusión económica en el desarrollo del país; (iii) ampliar la participación de los artistas, creadores, sectores populares, intelectuales, empresariales y otras fuerzas de la sociedad, para integrar sus demandas y propuestas; (iv) reformar y/o crear las leyes necesarias para garantizar el desarrollo del trabajo artístico e intelectual; (v) incorporar a los trabajadores del arte y la cultura al sistema de prestaciones sociales y garantías profesionales.

2. *Nueva institucionalidad.*

(i) Crear un Ministerio de Cultura como estructura decisoria que asuma la tarea de implementar las políticas culturales e impulse la coordinación interinstitucional con otras organizaciones; (ii) definir mecanismos que faciliten el acceso a fuentes de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo artístico; (iii) crear y aprobar un fondo nacional -de carácter mixto, estatal o privado- para la cultura y las artes; (iv) crear un fondo de becas a nivel nacional, para estudios especializados en artes y canalizarlas de forma efectiva y democrática.

3. *Programas educativos.*

(i) Introducir las modificaciones necesarias en la Reforma Educativa, y que la formación en artes sea un eje fundamental y transversal de la currícula en todos los niveles de enseñanza; (ii) fortalecer y crear, a nivel educativo nacional formal, centros de desarrollo para la sensibilidad y creatividad artística; (iii) crear una Escuela Superior de Artes, tomando en cuenta y adecuando la infraestructura y experiencia del Centro Nacional de Artes; (iv) estimular la excelencia en la formación profesional y práctica artísticas; (v) promover la formación de periodistas especializados en el área artístico-cultural y la creación de espacios culturales más representativos en los medios de comunicación.

²/ Acuerdo de las naciones participantes en la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales para el Desarrollo, realizada en Estocolmo, Suecia. UNESCO, 30 de marzo de 1998.

C. Deportes³

Quienes fueron consultados en esta área parten de la necesidad de una visión política, gubernamental y empresarial de la problemática de los deportes en El Salvador, la cual trasciende el campo de la educación hasta llegar a los sectores comunales, rurales, marginales y urbanos de nuestro país; porque la principal preocupación es que exista acceso a la práctica deportiva en todos los ámbitos sociales y geográficos.

En este sentido, el objetivo general de estas propuestas es precisamente que se fomente, desarrolle y promueva la práctica masiva del deporte en todos los estratos de la población. Se identificaron ocho problemas específicos que definen el estado real del deporte en El Salvador. Para cada uno de estos problemas se propone estrategias de solución.

Problemas identificados:

1. Insuficientes recursos económicos.
2. Deficiencias en el marco legal y la Política Nacional de Deportes.
3. Falta de jerarquía y apoyo al Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
4. Falta de formación y capacitación de recursos humanos que necesita el deporte.
5. Falta de instalaciones deportivas y mantenimiento de las existentes.
6. Falta de valoración del deporte estudiantil.
7. Falta de integración del sector salud y otros, a los planes y programas deportivos con carácter preventivo y de bienestar social.
8. Centralización del desarrollo y atención a los deportes en la capital y algunas zonas urbanas del país.

³ / Para la elaboración de este apartado se realizó una consulta con miembros del sector deportivo del país.

Estrategias sugeridas:

1. Establecimiento Constitucional de una asignación específica del Presupuesto General de la Nación sobre la base del 5%.
2. Implantación de impuestos al cigarrillo, alcohol y cerveza para que sean destinados al deporte.
3. Crear una Comisión coordinada por el INDES, que involucre a los sectores de salud, educación, gobiernos locales, Obras Públicas, Secretaría Nacional de la Familia, para que revise, adecúe, perfeccione y modernice la Ley General de los Deportes de El Salvador.
4. Crear el Ministerio Nacional de los Deportes, que regule las políticas nacionales de deporte.
5. Creación del Instituto de Formación y Capacitación de recursos Humanos para la Educación Física, el Deporte y la Recreación.
6. Establecimiento de programas de becas nacionales y en el extranjero para deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, dirigentes deportivos y otros.
7. Involucrar a los habitantes de las comunidades en la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas.
8. Que el Gobierno Central de la República, en coordinación con las alcaldías y empresas constructoras garanticen, por ley, que los proyectos de construcción de viviendas dejan espacios para instalaciones deportivas.
9. Establecer la obligatoriedad del programa de Educación Física y el deporte dentro del currículo escolar y asignar los profesores adecuados.
10. Actualizar los planes y programas de Educación Física para todos los niveles de enseñanza.
11. Crear planes interinstitucionales que manejen programas preventivos para sectores marginales y de alto riesgo.
12. Optimizar todos los recursos involucrados -materiales y humanos- para la promoción del deporte y la recreación en el interior del país.

“Salvadoreños y salvadoreñas en el exterior”

Autores

Ronald E. Barillas, Bernardo C. López, Luis López,
Roberto Lovato, Sandra L. Martínez, Ana Mello, José Napoleón Monterrosa,
Carlos A. Morales, Manuel Olmos, Montserrat Payán, Dagoberto Reyes,
Francisco Rivera, Óscar Sariles, Roxana E. Ulloa,
Alex Vanegas, Carlos Vaquerano.

A. Propuestas estratégicas

El trabajo realizado en apoyo a las Bases para el Plan de Nación identifica a los salvadoreños en el exterior como un recurso nacional de carácter estratégico para el desarrollo del país. Sin embargo, ese recurso corre el riesgo de desaprovecharse por un debilitamiento de sus nexos con El Salvador y, a la vez, el aporte económico que hasta ahora ha ofrecido a la Nación tenderá a disminuirse. Por lo cual, consideramos necesario implementar propuestas que buscan el máximo aprovechamiento de ese recurso.

A.1. Culturales

Desarrollar un trabajo cultural dirigido a fortalecer la identidad salvadoreña de los compatriotas residentes en el extranjero. De lo contrario, nuestras conexiones con el país sencillamente se desvanecerán.

A.2. Económicas

Crear redes fuertes y dinámicas de intercambio comercial y de inversión de doble vía, para complementar y, eventualmente, reemplazar la dependencia nacional en las remesas familiares que desaparecerán en las futuras generaciones.

A.3. Transferencia de conocimientos y tecnología

Aprovechar el cúmulo de conocimientos técnicos y profesionales adquirido por los salvadoreños en el exterior, para fortalecer la plataforma competitiva y, promover el desarrollo de el Salvador. Por ello es imperante establecer políticas y programas que faciliten la transferencia de conocimientos y tecnología entre los salvadoreños residiendo fuera del país y El Salvador.

A.4. Desarrollo práctico de la educación tecnológica y científica

Desarrollar la capacidad nacional para producir contribuciones propias y aplicarlas a los campos tecnológicos y científicos. Se deberá fortalecer los programas educativos a todo nivel y sostener un proceso de cooperación y retroalimentación constante con la empresa privada.

A.5. Políticas

Tomar medidas que propicien la participación activa y directa de los salvadoreños en el exterior, en los procesos sociales y democráticos del país. A pesar de que los salvadoreños en el exterior representamos un 20% de la nación salvadoreña y contribuimos significativamente a su economía, aún no se nos permite ejercer plenamente nuestros derechos políticos, incluyendo el derecho al voto. Una voluntad política de permitir el voto desde el exterior será un paso positivo hacia el fortalecimiento de nuestros vínculos con El Salvador y, de nuestra aún incipiente democracia.

B. Compromisos necesarios

Para la realización de estas propuestas es indispensable adoptar una política decisiva hacia los salvadoreños en el exterior. Para lo cual se considera necesario contar con los siguientes compromisos:

1. *Gobierno.*

El gobierno salvadoreño deberá tomar la iniciativa para sentar una política permanente de inclusión, acercamiento e interrelación con los ciudadanos residentes en el exterior. Esto requiere abandonar medidas improvisadas y cortoplacistas que hasta hoy se han manejado con respecto a los salvadoreños en el exterior, y entrar -de esta manera- a una fase de auténtica representación y compromiso con la nación entera.

2. *Institucionalidad.*

Consideramos necesario que se institucionalicen políticas y esfuerzos para construir canales, y fortalecer los lazos de cooperación entre los salvadoreños en el exterior y El Salvador.

3. *Político.*

Los líderes políticos deberán mostrar auténtica voluntad y compromiso hacia el pueblo salvadoreño, apoyando la adopción de estas propuestas.

4. *Empresa Privada.*

Las propuestas delineadas facilitan a la empresa privada una realización más inmediata de beneficios; por lo tanto, instamos a los elementos más activos de este sector a apoyar iniciativas gubernamentales que respondan a estas propuestas y, de ser necesario, a que sean ellos mismos los que las impulsen, en caso de una falta de iniciativa por parte del gobierno.

C. Acciones y plazos

De forma inmediata, instamos al presidente electo a integrar en su plan de gobierno una política de inclusión, acercamiento y representación para con los salvadoreños residiendo en el exterior. Igualmente, hacemos un llamado a los líderes políticos e intelectuales del país a apoyar estas propuestas y a velar por su consecución.

A corto plazo, establecer mecanismos para el desarrollo de estas propuestas a manera de programas piloto, con la participación activa, coordinada e integral de

los sectores arriba mencionados y, legislar la participación de los ciudadanos en el exterior en la vida política de El Salvador, a través del voto.

A mediano plazo, institucionalizar y desarrollar vínculos permanentes entre los salvadoreños en el exterior y El Salvador.

A largo plazo, mantener una relación dinámica y enriquecedora con los salvadoreños en el exterior, a través de programas de intercambio (académico, artístico, comercial, deportivo) y consulta, teniendo en cuenta que la realidad de las presentes y futuras generaciones en el exterior puede ser diferente, pero no por eso menos provechosa para El Salvador.

“Mesa multidisciplinaria de Washington”

Autores

Roberto J. Badía, Mauricio Bertrand, Luis René Cáceres,
Salvador Cortés Rosales (Coordinador), Alberto Harth,
Roberto Jiménez Ortiz, José I. Larios, Óscar Menjívar, Román Mayorga Quiroz,
Carlos Rosales, José Roberto Rosales, Gabriel Siri.

Propuestas estratégicas

Los integrantes de esta mesa no enfocaron su discusión y propuestas a una temática específica de desarrollo. Su trabajo retomó las diversas áreas que consideraron prioritarias a partir del documento “Bases para el Plan de Nación”, enfatizando además cómo este proyecto puede ser un verdadero instrumento para el fortalecimiento de la democracia en el país.

A. El Plan de Nación y el fortalecimiento de la democracia

Se trata de convertir el Plan y el ejercicio realizado para su elaboración, en un instrumento que permita: incorporar diversos sectores a la discusión sobre el país y su futuro; fortalecer la capacidad de exigir cuentas a los gobernantes y reafirmar un consenso nacional que enmarque posiciones políticas. En este

sentido, el Plan de Nación deberá trascender la política contingente y tener una perspectiva de mediano y largo plazo, así como metas evaluables que faciliten vigilar la acción del Estado y fomentar un mayor “control social” del ejercicio público.

De acuerdo a los integrantes de la mesa 17, la CND debe transformar el proceso de consulta en un foro de diálogo y concertación entre el Gobierno, las distintas organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones del sector privado. Más aún, el Gobierno debería establecer un proceso de consulta con la sociedad civil, sobre la formulación de políticas sociales y la asignación del gasto público.

B. Reforma electoral

Con el fin primordial de consolidar la cultura y la práctica democrática, se propone una reforma a la Constitución de la República y/o a la legislación secundaria aplicable. Esta deberá ser aprobada a través de un referéndum y deberá contemplar –entre otras cosas- que: (i) los ciudadanos de cada distrito electoral puedan elegir directamente al diputado que los representará; (ii) los ciudadanos en el extranjero puedan votar para Presidente de la República en su país de residencia y, (iii) se cree un registro de personas naturales y puedan ejercer el voto en su propio distrito domiciliar.

C. El papel del Estado

Las principales recomendaciones son:

1. El Estado debe actuar como complemento de los mercados y no en sustitución de ellos.
2. El Estado debe concentrarse primero en las tareas que puede y debe realizar, midiendo su capacidad y luego realizando mejoras a la capacidad del sector público por medio de reglas, asociaciones y presiones competitivas.

D. Política fiscal

Entre las estrategias se recomiendan:

1. La Administración Fiscal debe auditar a las grandes empresas con profesionalidad, incluso con inspectores fiscales extranjeros que enseñen y den fuerza a los inspectores nacionales.

2. Determinar cuáles son nuestros límites presupuestarios y de adquisición de deuda, lo cual nos permita desarrollar un plan estratégico que permita incrementar la calidad del gasto público. Esta transformación es gradual y pasa por la reingeniería de las instituciones que planifica, aprueban y ejecutan el gasto.

E. Relaciones exteriores y la nueva diplomacia

En tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ente al cual le corresponde liderar los esfuerzos de la sociedad por insertarse de manera favorable y eficiente en el mundo globalizante, se propone buscar:

1. La modernización y la profesionalización del servicio exterior salvadoreño.
2. Involucrar a amplios sectores de la sociedad en la promoción del debate y la discusión pública sobre las necesidades nacionales y las oportunidades internacionales.
3. Formular medidas proactivas que anticipen problemas y soluciones a problemas de seguridad nacional, desde la perspectiva internacional.
4. Promover enlaces entre diversos sectores, organizaciones gremiales y políticas, con sus homólogas de otros países para establecer redes de interés y cabildeo en el exterior.
5. Formular una estrategia de largo plazo que resguarde los intereses nacionales y el bienestar de los ciudadanos y de las empresas salvadoreñas en el exterior.

F. Infraestructura

A corto plazo se propone tres medidas para tener impacto sobre el desempleo, la eficiencia y la productividad:

1. Ejecutar un programa nacional de generación de empleo en obras, ubicadas principalmente en zonas rurales y urbanas pobres.
2. Poner en marcha una genuina “descentralización del poder y de la administración pública.
3. Crear un fondo vial de carácter autónomo y comercial para el mantenimiento de infraestructura pública. Dicho fondo sería suplido por impuestos de

importación de vehículos, repuestos, gasolina, matriculación de vehículos y peaje. Su administración sería con representación intersectorial.

A mediano plazo se proponen las siguientes medidas para tener impacto real sobre la pobreza:

1. La reforma institucional del sector infraestructura con la participación pública, privada y comunitaria, bajo los criterios de eficiencia y equidad.
2. Adopción de una estrategia para el Gran San Salvador, la cual incluiría:
 - (a) Dar prioridad a la reserva de terrenos para las futuras vías de circunvalación e interconexión regional.
 - (b) Establecer prioridades para las grandes redes y delegar su gestión a nivel local.
 - (c) Prohibir la urbanización de terrenos no desarrollables.
 - (d) Promover la concertación entre el Estado y el sector privado para el desarrollo de futuras grandes zonas.
 - (e) Reconsiderar los límites municipales para evitar tener 14 consejos municipales y alcaldes para una ciudad región.

G. Una estrategia salvadoreña de ciencia y tecnología

Partiendo de la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para absorber, generar, difundir y utilizar el conocimiento y sus aplicaciones productivas se propone una estrategia sistémica de Ciencia y Tecnología, cuyos elementos esbozamos a continuación:

1. Incluir un conjunto de componentes que vayan desde los servicios científico-técnicos para la difusión y utilización de tecnologías, hasta la formación de recursos humanos que constituyan la base de un Sistema Nacional de Innovación.
2. Combinar los siguientes tres tipos de inversión: (i) componentes de maduración relativamente rápida, consistentes en fortalecer la infraestructura de apoyo tecnológico a las empresas, mediante servicios científico-técnicos; (ii) componentes de plazo medio, centrados en investigación aplicada y desarrollo experimental; (iii) componentes de maduración relativamente lenta,

centrados en la formación de recursos humanos en las instituciones educativas de todos los niveles y en la investigación básica del nivel superior.

3. Creación de un Fondo Nacional de Innovación y una Fundación Nacional de Ciencia y Tecnología, que atenderían la demanda de los sectores productivos y, de los sectores educativos e investigativos, respectivamente.

H. Políticas de tratamiento de las remesas

Es necesario crear las condiciones que permitan maximizar los efectos positivos de las remesas. Para esto se propone:

1. Constituir un fondo anticíclico de inversión social y económica, que sea alimentado por un porcentaje del monto estimado de recaudación tributaria originada indirectamente por las remesas.
2. El Gobierno deberá jugar el papel de socio en el desarrollo de las comunidades receptoras de remesas, promoviendo junto con ellas, la creación de infraestructura comunitaria.
3. Aprobar una ley anti-lavado 'de dinero productor del crimen. Esto significará el primer paso para que las instituciones financieras nacionales puedan abrir sucursales en los Estados Unidos y se genere el ahorro directo de los migrantes.

I. Salud

El objetivo de las estrategias propuestas en esta área es reorganizar el sistema de salud, focalizando sus acciones en un cambio del "modelo de atención", que priorice el mejoramiento de la salud de la población en condición de riesgo social y biológico, y en el desarrollo de reformas institucionales del sector.

La estrategia básica es la configuración de un sistema de salud mixto, para lo cual se hace necesario:

1. Separar las funciones asignadas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPYAS).
2. La integración funcional del Ministerio y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

3. Modificar los mecanismos de financiamiento.
4. Descentralizar las responsabilidades del cuidado directo de la salud.

El logro de esto requiere:

1. Voluntad política expresada a través de un Acuerdo Social entre fuerzas políticas y sociales del país.
2. Incrementar el financiamiento al sector y focalizar el gasto público en favor de programas preventivos.
3. Mejorar la equidad, solidaridad y eficiencia en el uso de los recursos.
4. Desarrollar reformas profundas en el Ministerio y el ISSS.
5. Favorecer la coordinación intersectorial.

J. Educación

Guardando similitud con la mesa # 15, el objetivo de la estrategia de educación debe estar enfocada a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y equidad de la educación para que niños y niñas puedan enfrentar la época de competitividad, globalización económica y la revolución tecnológica mundial.

En este sentido es necesario un compromiso político al más alto nivel, incrementar la inversión y profundizar los cambios o reformas.

Asumido este compromiso, la estrategia deberá implicar:

1. Mejorar la calidad técnica de maestros y maestras.
2. Realizar reformas curriculares y mejorar su entrega.
3. Articular los diferentes niveles educativos.
4. Crear bibliotecas en el aula y, móviles.
5. Apoyar la investigación.
6. Acreditación de las universidades.

7. La creación de un grupo multidisciplinario de profesionales que propongan alternativas de rescate a la Universidad Nacional.

K. Financiamiento externo

Para el sector público se propone que:

1. Las gestiones de recursos externos abarquen también las negociaciones, con carácter de alta prioridad para la adquisición de conocimiento y formación de recursos humanos en el exterior.
2. Se prepare una estrategia de desarrollo económico social donde los distintos sectores encuentren consenso y sentido de pertenencia.
3. Se siga la política de que cada operación de préstamo o donación externa está acompañada por becas de estudios superiores en las áreas relacionadas con los sectores a ser atendidos.
4. Consolidar en una sola unidad las tareas de planificación estratégica, seguimiento y evaluación de programas atendidos con fondos externos.

Para el sector privado:

1. La creación de una ventanilla de preparación de proyectos, mediante facilidades de prevención, asesoría tecnológica y de mercados.
2. Realizar gestiones ante fuentes externas para establecer un fondo de capital de riesgo y, para la promoción de otras prácticas de la banca de inversión, tales como: titulación de carteras de financiamiento en títulos valores de baja dimensión, “project finance” y fondo de inversión.

Para las organizaciones de la sociedad civil (OSC):

Se propone la creación de un Banco Electrónico de Pequeños Proyectos. Este Banco Electrónico tendría como punto fundamental la preparación de perfiles de proyectos de las OSC y de las comunidades, de acuerdo a un formato estandarizado.

Para el apoyo a las municipalidades se sugiere:

1. Crear un grupo consultivo que presente a la comunidad de donantes la demanda de proyectos generados a través de las consultas del Plan de Nación

como por las tareas de reconstrucción debidas a la destrucción ocasionada por el huracán “Mitch”.

2. Estudiar la creación de una Lotería de Financiamiento Municipal, de cobertura nacional e internacional.

L. Gestión macroeconómica

Partiendo de que la formulación de políticas socioeconómicas debe regirse por los principios de pragmatismo, sin apego a ideologías y, de urgencia para alcanzar un desarrollo compartido, algunas de las propuestas hechas son:

1. Crear un fondo de reserva para enfrentar la caída de ingresos fiscales ante distintas contingencias y evitar que merme el financiamiento a la inversión social.
2. Hacer una enmienda a la Constitución, a fin de incorporar un artículo que establezca que el gasto público en educación alcance y se mantenga por lo menos a 6% del Producto Interno Bruto.

“Integración centroamericana, San José”

Autores

Miguel Araujo, Thomas Guerra, Enoc Márquez,
Tomás Medina, Rafael Menjivar, Elena Rivas, Saúl Velásquez,
Humberto Villalta (Coordinador).

Propuestas estratégicas

La Mesa 18, ubicada en Costa Rica, con base a los temas asignados por la CND en el proceso de consulta del Plan de Nación, se abocó al tratamiento de los siguientes puntos:

- A. Derechos políticos y participación en el desarrollo nacional de los salvadoreños en el exterior en el Plan de Nación.
- B. Mecanismos efectivos de participación de los salvadoreños en el exterior.
- C. Integración centroamericana.

En este documento-resumen se sintetizan particularmente las propuestas resultantes de las reflexiones temáticas realizadas.

A. Derechos políticos y participación en el desarrollo nacional

En lo que se refiere al primer tema y, reafirmando los derechos inherentes a la ciudadanía salvadoreña, mismos que no se pierden por residir en el exterior, se propone:

1. Creación de un mecanismo que cree las condiciones y asegure la participación consciente e informada de los salvadoreños en el extranjero. Al respecto se propone el funcionamiento de centros de promoción cívica, de educación ciudadana y divulgación de información general y especializada, relativa a la realidad nacional. Se sugiere que las embajadas y las asociaciones de residentes que funcionan podrían convertirse en el eje central para la creación de tal mecanismo.
2. Establecer un sistema que asegure el ejercicio de los derechos políticos de los salvadoreños residentes en el extranjero, a la vez que garantice a estos el derecho y el deber del sufragio. La mesa entiende que la implementación de este sistema implica un proceso de mediano plazo para las adecuaciones en las responsabilidades y funciones de las embajadas y consulados de El Salvador en el exterior, a partir de las respectivas reformas en el Código Electoral. Un punto de partida de tal dirección sería el levantamiento de censos de residentes en cada uno de los países donde el fenómeno adquiriera relevancia.

B. Mecanismos efectivos de participación

En lo que atañe al mecanismo de participación que involucraría tanto a los residentes como a organismos y sectores nacionales, en aras de una mejor relación bilateral con aquellos del país en que se aplicarían -para el caso Costa Rica- se proponen los siguientes, ampliamente detallados en el documento "Temas Claves para el Plan de Nación. Consulta Especializada":

1. Centros de promoción cívica.
2. Centros culturales.
3. Cámaras de comercio binacionales.
4. Unidades ejecutoras de convenios de cooperación técnica en apoyo al Plan de Nación.

Estos mecanismos podrían ser impulsados por embajadas, consulados y Asociaciones de Residentes, con el apoyo de los actores y organismos nacionales directamente vinculados con la actividad sugerida y los instrumentos y plazos del Plan de Nación.

C. Integración centroamericana

La Mesa 18 sostuvo que el tema de la integración centroamericana sería tratado por otras mesas y en tal sentido, el espíritu de la misma fue aportar reflexiones prospectivas generales que pudieran ser confrontadas con las apreciaciones que éstas pueden tener del proceso. Sobre tal base, se consideró que un aporte particular sería reflexionar sobre las relaciones que en el marco de la integración regional se dan entre los países de El Salvador y Costa Rica. Este último donde residen los integrantes de la mesa 18. Ello podría dar ideas más concretas sobre esto, con el fin de sugerir medidas a tomar para beneficio mutuo en tales relaciones.

Frente al esquema que se desarrolla a partir del Acuerdo de Esquipulas y enfatizando en los aspectos económicos e institucionales se llama la atención sobre los siguientes hechos:

1. Las cumbres de presidentes han sido determinantes para los avances políticos de la región y para la recuperación y revitalización de la integración. Sin embargo, como la misma Declaración de Panamá de 1997 reconoció, al hacer una evaluación del avance del proceso, se requiere fortalecer los niveles institucionales responsables de cumplir los acuerdos de tales cumbres, desde una posición deliberadamente jerarquizada que viabilice su cumplimiento.
2. Igual que sucedió en la fase anterior a los años ochenta, se está produciendo una tendencia al desequilibrio en el intercambio comercial entre los países de la región; lo que determina la necesidad de analizar las condiciones básicas en que se desenvuelve el comercio, para encontrar los mecanismos compensatorios para un comportamiento más equilibrado que fortalezca el proceso.
3. Tales actores, junto al Estado y la Sociedad Política deberían asumir las líneas centrales de la estrategia de desarrollo trazadas en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible acordada en la cumbre de presidentes celebrada en diciembre de 1994, en la que se articulan sus intereses y responsabilidades en los ámbitos económicos, sociales y de medio ambiente.

En lo relativo a la relación El Salvador-Costa Rica en el marco de la Integración Centroamericana, la mesa 18 considera que sería conveniente y de mutuo beneficio, lograr un acuerdo bilateral preferencial que permita estrechar el intercambio económico y comercial, de inversiones, tecnología, etc.

Concretamente se propone:

1. La creación de la cámara de Comercio Salvadoreña Costarricense, como un espacio de articulación de ambas culturas e intereses comerciales.
2. Aprovechar la posición estratégica de Costa Rica, de ser la sede regional de importantes organismos internacionales de cooperación técnica y financiera (Comunidad Económica Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo) y negociar un convenio para la creación del Consejo Internacional para la Integración Centroamericana, con el propósito de apoyar la labor del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y otros programas que se creen para la implementación de los acuerdos de las cumbres presidenciales y protocolos específicos.
3. Negociar y firmar Convenios con el INBIO y otros organismos de Costa Rica, en el marco del Acuerdo sobre Desarrollo Social Sostenible, para impulsar el desarrollo integral de las regiones fronterizas de los países centroamericanos.

“Información y comunicaciones para la democracia y el desarrollo”

Autores

René Alberto Contreras, Christina Courtright (Coordinadora),
Miguel Cruz, Breny Cuenca, Guido Flores Arenívar,
Marta Silvia Hernández, Rafael Antonio Ibarra, María Teresa Lorenzana,
Alfonso Moisés, Julio Rank, Elías Antonio Saca,
Ana María Urrutia de Lara.

A. Propuestas estratégicas

1. *Formulación e implementación de una política nacional de información y comunicaciones*, a partir de un foro nacional entre los sectores más involucrados, incluyendo el Gobierno, la política debe precisar derechos y responsabilidades para los diferentes sectores del país, tendientes a: (i) lograr el acceso universal a la información y las comunicaciones; (ii) estimular una cultura nacional de información y comunicaciones; (iii) fortalecer la identidad cultural salvadoreña y, (iv) potenciar la articulación y coordinación de las instancias involucradas en la generación y difusión de la información. Se crearía una comisión permanente y autónoma para fomentar y darle continuidad a dicha política.

2. *Estimular la generación sistemática de información*, tanto histórica como actual, que sea relevante y pertinente a todos los sectores, regiones y ámbitos de la vida salvadoreña.
3. *Establecimiento de una coordinación permanente entre medios de comunicación, comunicadores sociales y facultades de comunicación*, para:
(i) mejorar la calidad académica de las carreras de comunicaciones;
(ii) fomentar la formación continua del profesional; (iii) adecuar la oferta a la demanda y, (iv) proponer currículas escolares relevantes al Ministerio de Educación.
4. *Establecimiento de una coordinación permanente entre gestores de la información, desde personal técnico hasta gerentes y responsables institucionales*, para: (i) mejorar la calidad académica de la carrera de bibliotecología; (ii) crear una o más carreras nuevas de licenciatura en gestión de la información; (iii) fomentar la formación continua del profesional; (iv) adecuar la oferta a la demanda y, (v) proponer currículas escolares relevantes al Ministerio de Educación.

B. Compromisos necesarios

1. *Formulación e implementación de una política nacional de información y comunicaciones.*
 - Voluntad y compromiso gubernamental para la formulación participativa de una nueva política, compromiso y participación por parte de todos los sectores interesados.
 - Creación de una comisión permanente.
 - Compromiso de todos los sectores involucrados a darle seguimiento a la política y hacer realidad un país informado y comunicado.
 - Inversiones públicas selectivas y estratégicas en el mejoramiento de la infraestructura de información y comunicación, tendiente a democratizar el acceso y fomentar la participación. La nueva política deberá definir la instancia gubernamental, principalmente responsable de velar por el cumplimiento de los objetivos de dicha política.

2. *Estimular la generación sistemática de información.*

- Incentivos gubernamentales a la producción, sistematización y generación de contenido salvadoreño en todas las áreas de la vida nacional y cubriendo todas las regiones.
- Prioridad dentro de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para generar, organizar y difundir información según su especialidad.
- Mejoramientos tecnológicos en todas las instituciones para lograr los objetivos planteados de manera eficiente.

3. *Establecimiento de una coordinación permanente entre medios de comunicación, comunicadores sociales y facultades de comunicación.*

- Visión y voluntad entre los dueños de los medios de comunicación, comunicadores sociales y las escuelas y facultades que forman los profesionales en este campo, para superar sus diferencias y velar por la profesionalización del sector.
- Visión a largo plazo de los beneficios para el desarrollo y la democracia que arrojaría este tipo de colaboración.
- Coordinación con el Ministerio de Educación para incorporar el enfoque de las comunicaciones en el currículo escolar.

4. *Establecimiento de una coordinación permanente entre gestores de la información, desde personal técnico hasta gerentes y responsables institucionales.*

- Visión y voluntad entre responsables de bibliotecas y centros de documentación, las instituciones que los albergan, docentes de la carrera, y los gestores de la información a todo nivel; para colaborar permanentemente y racionalizar recursos, elevar la calidad técnica y tecnológica del procesamiento y la organización de la información.
- Coordinación con Ministerio de Educación para incorporar el enfoque de la información en el currículum escolar.

C. Actores principales

- Todas las dependencias del Gobierno Central.
- Gobiernos municipales.
- Propietarios de los medios de comunicación.
- Empresas proveedoras de servicios de comunicaciones e información.
- Directores de centros de información.
- Directores de las instituciones que albergan centros de información.
- Comunicadores sociales y sus gremios representativos.
- Gestores/Profesionales de la información y sus gremios representativos.
- Facultades y docentes de las carreras de información y de comunicaciones.
- Sociedad civil en general.

D. Acciones y plazos

2000 – 2005	2006 – 2010	2011 – 2020
<ul style="list-style-type: none"> ■ Formulación e implantación de una política nacional de información y comunicaciones. ■ Establecimiento de coordinaciones efectivas, tanto en el área de la información como de la comunicación social. ■ Dinámica positiva en cuanto a la generación de contenidos nacionales. ■ Establecimiento de 100 centros de acceso compartido e interactivo a la información y las comunicaciones en toda el país. ■ Implementación de currículas escolares sobre la información y las comunicaciones ■ Creación de una o más carreras de licenciatura en gestión de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Existencia de una masa crítica de contenidos nacionales (dinámica sostenible). ■ Más de la mitad de la población es usuaria capaz y ágil de la información y las comunicaciones. ■ El 80% de la población tiene acceso adecuado a servicios de información y comunicaciones. ■ Duplicación del número actual de bibliotecas públicas con una dotación adecuada de recursos. ■ Digitalización y puesta en red de los catálogos de las bibliotecas y principales centros de documentación del país. ■ Institucionalización del papel de los medios de comunicación social para la promoción de la transparencia en la gestión gubernamental. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sociedad informada y comunicada. ■ Inventario total, accesible y dinámico de información sobre todos los aspectos de la realidad nacional (histórica y actual). ■ Bibliotecas adecuadas en el 80% de las escuelas públicas. ■ Estudio, debate y difusión permanente acerca de la identidad y cultura nacional (histórica y actual), tomando en cuenta la 'salvadoreñidad' internacional. ■ Duplicación del número actual de medios de comunicación social, con un correspondiente aumento en su diversidad. ■ La mayoría de la población dedica una porción de su día a la lectura.

INSTITUCIONES DE APOYO Y SOPORTE A LAS MESAS ESPECIALIZADAS

	NOMBRE	SIGLAS
1	Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana	SG-SICA
2	Asesoramiento en el Fomento Municipal y la Descentralización. Cooperación Técnica Alemana.	PROMUDE-GTZ
3	Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral	FUSAI
4	Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo	FEPADE
5	Museo Stephen W. Hawking	
6	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	CONACYT
7	Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo	FUNDAUNGO
8	Fundación Friedrich Ebert	FES
9	Colegio de Altos Estudios Estratégicos	CAEE
10	Banco Multisectorial de Inversiones	BMI
11	Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social	FUSADES
12	Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador	CAMAGRO
13	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación	FAO
14	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	IICA
15	Fundación Obrero Empresarial Salvadoreña	FOES
16	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina en El Salvador	OACDH
17	Instituto Salvadoreño para la Democracia	ISPAD
18	Asociación Bancaria Salvadoreña	ABANSA
19	Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente	PRISMA
20	Fundación Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Social	FUSAL
21	Consejo Nacional para la Cultura y el Arte	CONCULTURA
22	Organización Panamericana para la Salud	OPS
23	Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima	FUNDASAL
24	Fundación para la Vivienda Cooperativa	CHF
25	Colegio de Arquitectos de El Salvador	CADES
26	Fundación Antidrogas de El Salvador	FUNDASALVA
27	Universidad Tecnológica de El Salvador	UTEC
28	Fundación María Escalón de Núñez	
29	Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	INDES
30	Revista y Suplementos Tendencias	TENDENCIAS
31	Casa de Amigos San Vicente, en Los Ángeles	
32	Casa de la Cultura de Los Ángeles	
33	Service Employees International Union. (Oficina Reg. En Los Ángeles)	SEIU
34	Asociación Cuscatleca Costarricense Izalco	

INSTITUCIONES DE APOYO Y SOPORTE

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Instituto Salvadoreño para la Democracia (ISPADE)

Asesoramiento en el Fomento Municipal y la Descentralización.
Cooperación Técnica Alemana (PROMUDE-GTZ)

Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI)

Museo Stephen W. Hawking

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA)

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)

Organización Panamericana para la Salud (OPS)

Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)

Colegio de Arquitectos de El Salvador (CADES)

Fundación Friedrich Ebert (FES)

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Banco Multisectorial de Inversiones (BMI)

Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO)

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Revista y Suplementos TENDENCIAS

Fundación Obrero Empresarial Salvadoreña (FOES)

Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Oficina El Salvador (OACDH)

Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA)

Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA)

Fundación Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Social (FUSAL)

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL)

Fundación para la Vivienda Cooperativa (CHF)

Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)

Fundación Antidrogas de El Salvador (FUNDASALVA)

Casa de Amigos San Vicente en Los Ángeles

Casa de la Cultura de Los Ángeles

Service Employees International Union, Oficina Regional en Los Ángeles

Asociación Cuscatleca Costarricense Izalco

Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE)

Fundación María Escalón de Núñez